

**Prostitución infantil y trata de menores: corresponsabilidad de la familia y del estado.**

**Investigadores**

**Edwin Enrique Lozano González**

**María José Ruz Yepes**

**Johanna Soto Arevalo**

**Director**

**Alicia Alvarez Pertuz**

**Especialista en Derecho de Familia**

**Especialista en estudios pedagógicos**

**Magister en Educación**

**Cotutor**

**Laura Patricia Carrasquilla Díaz**

**Magíster en Derecho Privado Patrimonial**

**Especialista en Derecho Comercial**

**Universidad de la Costa CUC**

**Departamento de derecho y ciencias políticas**

**Programa de Derecho**

**Barranquilla**

**2018**

**Prostitución infantil y trata de menores: corresponsabilidad de la familia y del estado.**

**Investigadores**

**Edwin Enrique Lozano González**

**María José Ruz Yepes**

**Johanna Soto Arevalo**

**Universidad de la Costa CUC**

**Departamento de derecho y ciencias políticas**

**Programa de Derecho**

**Barranquilla**

**2018**

**Resumen**

La prostitución infantil y la trata de menores es una problemática a gran escala y con unos efectos en la población que la padece, de grandes dimensiones, pues sus secuelas marcan para siempre la vida de los niños, niñas y adolescentes que la sufren. Para abordar esta temática se plantearon unos objetivos específicos tales como Describir la prostitución infantil y la trata de menores como conducta punible y como fenómeno social, identificar las causas y efectos de la prostitución infantil y la trata de menores y por último determinar las políticas diseñadas por el gobierno, a través de las instituciones del Estado para detener el alto índice de prostitución en la población infantil en Barranquilla. La presente investigación es de corte socio-jurídico y analítico, a través del cual se buscó obtener unos resultados y llegar a unas conclusiones que muestran la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo de los estratos I y II, los cuales están expuestos a innumerables peligros y la precariedad de sus condiciones de vida los hacen víctimas fáciles de personas inescrupulosas que los utilizan para explotarlos sexualmente y lucrarse de ellos, frente a la mirada indiferente y permisiva de la familia, la sociedad y el Estado, que son los entes encargados de brindarles protección y amparo en todo momento.

***Palabras clave:*** Prostitución Infantil, Proxenetas, Enfermedades Venéreas, Trata De Personas, Dignidad Humana.

**Abstract**

Child prostitution and trafficking in children is a problem on a large scale and with effects on the population that suffers it, of large dimensions, because its consequences mark forever the lives of children and adolescents who suffer it. To address this issue, specific objectives were proposed, such as Describing child prostitution and trafficking in minors as punishable behavior and as a social phenomenon, identifying the causes and effects of child prostitution and trafficking in minors, and finally determining the policies designed by the government, through state institutions to stop the high rate of prostitution in the child population in Barranquilla. The present investigation is of a socio-juridical and analytical nature, through which it was possible to obtain some results and reach conclusions that show how vulnerable children and adolescents are, especially of strata I and II, which they are exposed to innumerable dangers and the precariousness of their living conditions makes them easy victims of unscrupulous people who use them to exploit them sexually and profit from them, in the face of the indifferent and permissive gaze of family, society and the State, which are the entities in charge of providing protection and protection at all times.

**Keywords:** Child Prostitution, Pimps, Venereal Diseases, Trafficking in Persons, Human Dignity.

## Contenido

Lista de tablas y figuras.....	6
Introducción .....	7
Capítulo I.....	9
1. Planteamiento del problema .....	9
1.1. Objetivos .....	10
1.1.1. Objetivo General .....	10
1.1.2. Objetivos Específicos .....	10
1.2. Justificación .....	10
1.3. Delimitación.....	12
Capítulo II .....	13
2 Marco Teórico.....	13
2.1. Antecedentes de la prostitución infantil a nivel internacional. ....	13
2.1.1. Prostitución infantil en Colombia .....	18
2.1.1.2.Bases teóricas.....	19
2.2. Causas y efectos de la prostitución infantil y la trata de menores. ....	26
2.3. Políticas.....	40
2.3.1. Corresponsabilidad del estado y la familia .....	49
3. Marco Histórico .....	53
3.1. Marco Conceptual.....	59
3.1.1. Omisión de denuncia de particular .....	63
3.1.1.2 Tipo de investigación.....	106
3.2. Nivel de investigación.....	106
3.3. Totales.....	118
4. Análisis de resultados e interpretación de datos .....	119
5. Conclusiones .....	121
6. Recomendaciones .....	122
7. Referencias.....	123

**Lista de tablas y figuras****Tablas.**

<b>Tabla 1.</b> Municipios con mayor tasa de fecundidad	32
Tabla 2. Derecho comparado con relación a los países	72
Tabla 3. Resoluciones de Organismos Internacionales	79
Tabla 4. Internacionales sobre trata de personas	85

**Figuras.**

Figura 1. Acceso carnal violento en menor de 14 años	27
Figura 2. Implicados en las actividades sexuales	33
Figura 3. Turismo Sexual	34
Figura 4. Resultado de la encuesta	110
Figura 5. Efectividad de los programas y políticas	111
Figura 6. Resultado de la encuesta a cerca de la prostitución.	111
Figura 7. Resultado de la encuesta de la violencia intrafamiliar.	112
Figura 8. Encuesta de programa y políticas.	113
Figura 9. Encuesta de efectividad de programa	113
Figura 10. Encuesta a cerca de estar en contra a las personas que incitan la prostitución	114
Figura 11. Violencia intrafamiliar en la prostitución infantil	114
Figura 12. Programas y políticas para erradicar la prostitucion	115
Figura 13. Efectividad de los programas políticos	115

### **Introducción**

Se partió del principio constitucional emanado de la Carta Magna en su artículo 44, que al respecto prevé “el interés supremo del menor y la prevalencia de sus derechos sobre los demás”, en concordancia con los Tratados Internacionales y el Código de la Infancia y la Adolescencia, los cuales ponen de presente una serie de postulados tendientes a preservar la integridad física, moral y psicológica de los niños, niñas y adolescentes.

Según la Constitución Política Colombiana, los menores, “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos forzados”, enfatiza el artículo 44 en concordancia con el artículo 5º que hace referencia a la primacía de los derechos de la persona y la familia al establecer que “el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Ese mismo estado que pregonas las garantías, se olvida a veces de la población infantil, como en el caso que nos ocupa, respecto a la trata de menores y la prostitución infantil.

De esta manera, se pretende con este trabajo de investigación, indagar sobre aquellos elementos que permitan conocer, de forma categórica, la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en cuanto a la ocurrencia de estas conductas delictivas que ponen en riesgo a los menores que son víctimas de tan nefastas prácticas.

De igual manera, se hace necesario saber las causas que inciden en que los niños, niñas y adolescentes incursionen en estas actividades tan nocivas para su desarrollo como personas, así como los efectos que esta puede causar, en el corto, mediano y largo plazo.

Posteriormente, se buscará establecer el papel que desempeñan la familia y el Estado, este último en su rol protector y garante de los derechos constitucionales que le asisten a este sector de la población, que, por su misma condición de indefensión y vulnerabilidad, están a expensas de personas inescrupulosas que se aprovechan de sus necesidades para lucrarse ilícitamente de ellos, convirtiéndolos en mercancías que se venden al mejor postor.



## Capítulo I

### 1. Planteamiento del problema

Los problemas familiares y la descomposición social, ameritan que la intervención del Estado sea efectiva y eficaz, sobre todo para la población infantil y darle no solo protección, sino, asesoría y acompañamiento de diverso orden a los menores inmersos en esta problemática, así como también a su núcleo familiar, el cual es en ocasiones, el causante que los menores incursionen en estas prácticas, y peor aún, que lo hagan con su anuencia y complacencia, ya que en algunos casos obtienen un beneficio económico de ello (OIT, 2006, p. 136).

Es menester precisar que las causas de la prostitución infantil y la trata de menores, suelen ser de diversa índole, lo que demanda un estudio profundo y minucioso que permita abordar la problemática desde diversas perspectivas a fin de atacar sus causas y minimizar el impacto de sus efectos, teniendo en cuenta que las víctimas de estos delitos son menores de edad, lo cual requiere de un abordaje interdisciplinario y efectivo con miras a preservar sus derechos y dignidad humana. El proxenetismo y la trata de menores son los lunares que el Estado debe borrar del entorno social para prevenir la prostitución infantil, con la implementación de medidas desde el área penal, social y familiar, de tal manera que se le brinde a los menores un ambiente sano y propicio para que desarrolle su proyecto de vida y satisfaga sus necesidades básicas, sin tener necesidad de comerciar con su cuerpo para sobrevivir en un ámbito tan hostil para quienes no cuentan con los recursos económicos necesarios y suficientes para alcanzar un adecuado nivel de vida.

Ante la proliferación cotidiana de tan abominable práctica, cruda realidad, pero realidad al fin, nos hacemos la siguiente pregunta problema:

## **¿Cómo se da la corresponsabilidad de la familia y del Estado en la práctica de la prostitución infantil y la trata de menores**

### **1.1.Objetivos**

#### **1.1.1. Objetivo General**

Analizar la prostitución infantil y la trata de menores desde la perspectiva de la corresponsabilidad de la familia y del Estado.

#### **1.1.2. Objetivos Específicos**

- ❖ Describir la prostitución infantil y la trata de menores como conducta punible y como fenómeno social.
- ❖ Identificar las causas y efectos de la prostitución infantil y la trata de menores desde la dinámica familiar.
- ❖ Determinar las políticas diseñadas por el gobierno, a través de las instituciones del Estado para disminuir el alto índice de prostitución infantil en la ciudad de Barranquilla.

### **1.2.Justificación**

La proliferación de la prostitución infantil y la trata de menores, es una problemática muy grave que pone en tela de juicio el papel protector de la familia y coadyuvantes de la sociedad del Estado, tanto en la crianza con la educación y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad.

Es por ello que la ESCNNA- La Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes puede aumentar en función de variables familiares y de contexto, como la tolerancia y legitimación por parte de una sociedad que desconoce la gravedad del problema, y que paradójicamente en

muchos casos lo considera la solución a la pobreza, al maltrato y al abandono en que se encuentra una buena parte de la población infantil y juvenil en Colombia (OIT, 2006, p. 10).

Resulta de suma importancia abordar este tema por cuanto la población infantil representa un sector muy importante de nuestro entorno y, todo lo que alrededor de ellos suceda es de interés de la sociedad y del Estado, bajo el concepto de la corresponsabilidad que debe asumir en la labor de hacer prevalecer los derechos y garantías constitucionales de los menores y adolescentes de la ciudad de Barranquilla y de Colombia en general<sup>1</sup>.

Desde la academia es una temática que resulta muy interesante por cuanto puede ser abordada desde diversas áreas del conocimiento tales como el derecho constitucional, penal, de familia, y derechos humanos, entre otras, lo cual permitirá hacer un estudio interdisciplinario que arrojará resultados de sumo interés, que amerita ser analizados en búsqueda de estrategias que frenen el crecimiento de este flagelo y así poder brindar nuevas oportunidades a estos niños y adolescentes y puedan crecer en un ambiente adecuado para su desarrollo físico, psicológico y emocional.

Los resultados que arroje esta investigación servirán como material de estudio para diferentes cátedras relacionadas tanto con el derecho privado como con el derecho público, así como para incentivar la profundización de su estudio a través de posteriores investigaciones sobre la misma temática u otras afines con las cuales guarde similitud o concordancia.

De igual manera, esta investigación puede ser útil para socializar sus resultados, y a partir de ellos, tomar acciones para mitigar los efectos nocivos que estas prácticas dejan en los niños y jóvenes que la padecen y, de esta manera hacer prevalecer el principio que plantea la Constitución Política de Colombia al manifiesta en su artículo 44, que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás.

---

<sup>1</sup> Según estudios realizados por el ICBF y el Ministerio de Protección Social.

### **1.3.Delimitación**

#### **1.3.1. Espacial**

Este estudio se realizó en tres barrios de la Ciudad de Barranquilla, en el Departamento del Atlántico.

#### **1.3.2. Temporal**

Las fechas en las cuales se desarrolló esta investigación datan del año 2017 desde el mes de agosto hasta finales del mes de septiembre del mismo año.

**Capítulo II****2 Marco Teórico****2.1. Antecedentes de la prostitución infantil a nivel internacional.**

La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, ESCNNA, constituye una violación fundamental de los derechos de la niñez. Abarca el abuso sexual por parte de un adulto y remuneración en dinero o especie para una tercera persona o personas. De acuerdo al Código Penal, se tipifica como delito la inducción (art 213), el constreñimiento (art. 214) y el estímulo (art. 217) a la prostitución. “De esta manera se descarta la connotación de voluntariedad de los niños, niñas y jóvenes en el ejercicio de esta actividad, y se traslada la responsabilidad al tercero que se beneficia, es decir, a quien induce, constriñe o estimula”.

El niño, niña o adolescente es tratado(a) como un objeto sexual y como mercancía. La explotación sexual comercial de la niñez es una forma de coerción y violencia contra los niños, niñas y adolescentes, la cual puede implicar el trabajo forzoso y constituye una forma contemporánea de esclavitud (Congreso Mundial contra la ESCNNA 2016).

Es entendida la utilización de los niños, niñas y adolescentes en la prostitución como una de las cuatro formas principales de la ESCNNA, siendo las otras tres, la pornografía, la trata con fines sexuales y el turismo sexual (Ministerio de la Protección Social et al 2004).

Según el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños”, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, (Aprobados por Colombia mediante la Ley 800 de 2003), la trata de personas se define como: “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión de pagos o beneficios para obtener el

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o la extracción de órganos”. (Naciones Unidas 2016: 35)

Según el protocolo “el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar, descrita en el párrafo anterior, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado”. (Naciones Unidas 2016: 35).

En el caso de los menores de dieciocho años, se estipula que aún sin acudir a cualquier medio de coacción, cuando se da la movilidad y la explotación, se constituye el delito de la trata de personas. Según el Protocolo: “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará trata de personas” (Naciones Unidas 2016: 35).

La inmadurez característica de las edades tempranas, limita el juicio y la capacidad de proveer las consecuencias de las acciones propias, es por eso que puede considerarse condición suficiente de vulnerabilidad para la utilización de los niños, niñas y adolescentes en la prostitución.

La vulnerabilidad aparece en condiciones de carencia afectiva, abandono, precariedad material, presión de padres y otros factores inherentes a la vida callejera, o aún hogareña, de muchos niños, niñas y adolescentes que han sido utilizados en la prostitución

La coacción y el abuso de poder son factores que están presentes en la utilización de los niños, niñas y adolescentes en la prostitución, siendo ejercidos casi siempre por los progenitores, compañeros sentimentales, u otras personas a cargo de los niños, niñas y adolescentes que buscan la obtención de beneficios a través de la explotación.

El anterior estudio fue realizado por el Dr. William Mejía Ochoa, director del Grupo de Investigaciones en Movilidad Humana. Red Alma Mater, en el departamento de Risaralda.

De igual manera, es digno resaltar el meritorio trabajo realizado por el Dr. Oscar Julián Cuesta (2015) en su artículo Investigaciones sobre trata de personas y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en la revista jurídica de la universidad de Antioquia, en la que hace propuestas de sensibilización para la prevención y medios de comunicación, presenta los resultados de una revisión de documentos publicados por organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y trabajos académicos sobre trata de personas, explotación sexual comercial de niños, niña y adolescente (ESCNNA). Dichos documentos fueron examinados sobre las tendencias investigativas, las propuestas de sensibilización para la prevención y el papel que juegan los medios de comunicación en estas problemáticas.

Los resultados arrojaron que, entre 2001 y 2013, la mayoría de investigaciones realizadas en Colombia toman como objeto de estudio la trata asociada a la explotación sexual, especialmente infantil y de mujeres. Existe un menor desarrollo de trabajos sobre la trata asociada a las relaciones filiales (matrimonio servil y adopción con fines de explotación), comisión de ilícitos (participación en diferentes delitos como transporte de droga y robos) y tráfico de órganos.

Por otra parte, la trata de niños y niñas afecta a los menores del mundo entero, tanto en los países industrializados como a los que están en proceso de desarrollo. Los niños y niñas víctimas de la trata son objeto de prostitución, matrimonio forzado o adopción ilegal, o son utilizados como mano de obra barata o no remunerada, sirviendo como criados en las casas, o reclutándolos para incorporarlos a grupos armados o se los usa para jugar en equipos deportivos. La trata expone a los niños y niñas a la violencia, el abuso sexual y la infección por VIH, y vulnera su derecho a la protección, a crecer en un entorno familiar y a realizar unos estudios. Un “niño o niña víctima de

la trata” es cualquier persona menor de 18 años reclutada, transportada, transferida, acogida o recibida para fines de explotación, sea dentro o fuera de un determinado país. El uso de medios ilícitos, entre ellos la violencia o el fraude, es irrelevante. Acabar con la trata requerirá la cooperación internacional, regional y nacional. Para abordar el problema, es preciso analizar tanto sus raíces –pobreza, discriminación, exclusión y violencia– como el aspecto de la demanda.

Según la UNICEF, la naturaleza invisible y clandestina de la trata y la falta de una sólida recopilación de datos hacen que sea difícil saber el número de víctimas infantiles a nivel mundial. Sin embargo, según las últimas estimaciones disponibles, cerca de 1.2 millones de niños son objeto de trata todos los años.

- En Asia oriental y el Pacífico, la mayor parte de la trata está dirigida a la prostitución infantil, aunque se recluta también a algunos niños y niñas para trabajos agrícolas e industriales. En Asia meridional, la trata está vinculada a menudo con la servidumbre por deudas.
- En Europa, la dirección de la trata es sobre todo de este a oeste, lo que refleja la demanda de mano de obra barata y prostitución infantil.

En otra investigación realizada por la Organización Internacional del Trabajo – OIT- se concluyó que la explotación sexual comercial infantil (ESCI) es una grave violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y una forma de explotación económica análoga a la esclavitud y al trabajo forzoso, que constituye además un delito por parte de los que utilizan a niñas, niños y adolescentes para el comercio sexual.

La Explotación Sexual Comercial Infantil comprende todos los aspectos siguientes:



- La utilización de niños y niñas en actividades sexuales remuneradas, en efectivo o en especie, (conocida comúnmente como prostitución infantil) en las calles o en el interior de establecimientos, en lugares como burdeles, discotecas, salones de masaje, bares, hoteles y restaurantes, entre otros;
- La trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual;
- El turismo sexual infantil;
- La producción, promoción y distribución de pornografía que involucra niños, niñas y adolescentes, y
- El uso de niños en espectáculos sexuales (públicos o privados).

Del mismo modo, la Declaración de Estocolmo, adoptada en el Congreso mundial contra la explotación sexual comercial infantil (1996), define la explotación sexual comercial infantil como “una forma de coerción y violencia contra los niños (que) equivale al trabajo forzoso y a una forma contemporánea de esclavitud”, mientras que en el Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños (conocido como el Protocolo de Palermo), la definición del término “explotación” incluye “la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. En 2006, el Informe del Experto independiente encargado del Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, también reconoce que la explotación de los niños menores de 18 años mediante la prostitución, pornografía infantil y actividades similares constituye un acto de violencia.

### **Prostitución infantil en Colombia**

No se puede establecer con exactitud la fecha desde cuando comenzó la prostitución infantil en Colombia. Lo que se tiene en cuenta para determinar este fenómeno que, pone en peligro la integridad física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes, es la dinámica del conflicto armado, la cual constituye uno de los escenarios más violentos y amenazadores para el ejercicio de los derechos de los infantes de nuestro país, quienes eran secuestrados para distintos fines, entre ellos la explotación sexual y comercial.

UNICEF calcula que en Colombia hay en este momento 55 mil niños y niñas vinculados a la explotación sexual. Según el mismo estudio la cifra se ha triplicado en los últimos tres años, y la edad en que se induce al abuso se ha reducido incluso por debajo de los 10 años. La mayoría de los menores prostituidos han sido abusados sexualmente por algún conocido y el paso a convertir el sexo una profesión no es "tan grande". Muchos huyen de sus casas y caen en la droga o el alcohol. En ese momento el proxeneta puede llegar a adquirir un papel paternal en la vida del menor que pocas veces lo denuncia<sup>2</sup>.

La ONU adoptó el 20 de noviembre de 1989 la Convención sobre los derechos del niño (ratificada por Colombia mediante la ley 12 de 1991). La Constitución Política de Colombia, expedida en 1991, adoptó los lineamientos de la Convención incluyendo un catálogo de derechos de los niños y otorgándoles un status superior frente a los derechos de los demás. El 8 de noviembre de 2006, se dicta en Colombia la ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y Adolescencia).

En Colombia, de acuerdo al artículo 28 del Código del Menor «se entiende por menor a quien no haya cumplido los dieciocho (18) años». Por otro lado, según la Ley de la Juventud, se entiende

---

<sup>2</sup> Basta prostitución infantil en Colombia. Fundación Unimedicos

por joven a la persona entre 14 y 26 años de edad, por ende, niños son las personas entre 0 y 13 años de edad

### **Bases teóricas**

El delito de la trata de personas es una problemática globalizada que guarda una estrecha relación con los movimientos migratorios y, se puede entender como el traslado de seres humanos dentro o fuera de las fronteras de un país, con el propósito de someterlos a diversas formas de explotación. Ha sido reconocida por la comunidad internacional y nacional como una forma actual de esclavitud que vulnera los Derechos Humanos al degradar a las personas a la condición de mercancía. (UNODC, 2010).

La explotación sexual es una actividad ilegal mediante la cual una persona es sometida de forma violenta a realizar actividades sexuales sin su consentimiento, por lo cual un tercero recibe una remuneración económica, lo cual es más grave y denigrante cuando de menores de edad se trata.

La prostitución infantil es una realidad social de ámbito delictual que tiene ocurrencia con el desarrollo de actos sexuales entre un menor de 18 años y uno mayor de edad, a cambio de bienes materiales, económicos o de cualquier otro beneficio. La prostitución infantil suele abundar en los países, regiones, estados y provincias, subdesarrolladas donde prolifera la pobreza y la falta de oportunidades de trabajo y ven en el comercio sexual una oportunidad de ganar dinero, así, el servicio sexual por un infante a cambio de un pago se habla de prostitución infantil.

La prostitución infantil es una realidad social de ámbito delictivo, con el desarrollo de actos sexuales entre un menor de 18 años y uno de mayor edad a cambio de bienes materiales, económicos o de cualquier otro beneficio (Ramírez, xx, p. 20).

Este tipo de prostitución suele abundar en los países, regiones, estados, y provincias más pobres. No obstante, esta definición, cuando hay abuso sexual de niños, no se puede considerar como

prostitución, ya que el abusado (víctima) no recibe ningún tipo de pago. Es decir, solamente cuando un infante presta un servicio sexual a cambio de un pago podría hablarse de prostitución infantil, que está prohibida en la gran mayoría de los países.

La prostitución infantil ocurre principalmente por la pobreza extrema en algunas zonas de países desarrollados, y en países subdesarrollados. Hay diversos factores que incitan a los menores de edad a prostituirse, entre los cuales puede señalarse las necesidades económicas en el hogar y las propias, abandono del hogar a temprana edad lo que los obliga a proveerse su propia subsistencia, el sustento de alguna adicción, entre otras.

El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas, sin consentimiento de una, la cual puede producirse entre adultos, de un adulto a un menor, o incluso, entre menores.

Como actividad sexual se incluye:

- Cualquier tipo de penetración, roces o caricias de órganos genitales en contra de la voluntad (por lo tanto, puede ser acoso), o tocamiento de los órganos genitales del abusador.
- Cualquier acción que inste a un menor a presenciar actos sexuales (observar adultos desnudos o mientras mantienen relaciones sexuales con otras personas, ver material pornográfico o asistir a conversaciones de contenido sexual, por ejemplo). Un tipo de abuso sexual es la violación, considerada delito sin importar la edad de la víctima.

El término pornografía, procede del griego *πορνογραφία*, que es, por un lado, *porne* o "prostituta" y *grafía* por el otro, que significa "descripción", y por extensión, las actividades propias de ese oficio. Hay que decir, sin embargo, que el término es de reciente aparición, pues en Grecia antigua nunca se usó esa palabra. Hoy se entiende por pornografía un conjunto de materiales, imágenes o reproducciones de la realización de actos sexuales, con el fin de provocar excitación

sexual del receptor. La pornografía se manifiesta principalmente a través de tres medios: Cine, fotografía y literatura, aunque también admite representaciones a través de otros medios como el cómic, escultura, pintura, e inclusive el audio (teléfono erótico, entre otros).

La prostitución infantil no la "comete" el propio niño (a), sino, la persona que contrata u ofrece sus servicios. La definición disminuiría por tanto la confusión con otras formas de explotación y malos tratos de niños. Pero entre los tipos más graves y detestables de violencia contra los niños figura la explotación sexual, especialmente la prostitución. Es comparable a la tortura en cuanto al trauma causado al menor y constituye una de las formas más graves de conculcar sus derechos. Es por ello que la prostitución infantil se ha convertido en un flagelo transnacional y en uno de los negocios más rentables para aquellas personas que se dedican a promoverla.

La Convención sobre los Derechos del Niño es un conjunto de normas que dan a los niños y adolescentes un papel protagónico en la sociedad y busca preservar sus derechos humanos básicos y permanentes, así cuando un Estado ratifica la Convención queda comprometido a velar por interés superior de los niños y niñas en la toma de las medidas y políticas tendientes a la salvaguarda de todos sus derechos. La primera Convención de los derechos del niño se aprobó en 1989.

A partir del Primer Congreso Mundial contra la explotación Sexual Comercial de los Niños desarrollado en Estocolmo, Suecia (1996), se expide la Declaración y Programa de Acción contra este flagelo que se extiende por todos los países, el cual contó con la participación de 122 Estados

En febrero de 2001 se realizó una consulta sobre violencia sexual a niños, niñas y adolescentes de América Latina realizada en Costa Rica, proclamándose la Declaración de San José, en donde

quedó consignado que solo veintidós países latinoamericanos habían avanzado en el plan de acción contra la explotación infantil.

El trabajo de Cárdenas y Rivera (2000) señala que factores familiares como el abandono, la separación marital, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el alcoholismo, la drogadicción, la pobreza extrema, entre otros, conforman un contexto de riesgo y vulnerabilidad específica para niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual. En dicho contexto de vulnerabilidad figurado por estos autores (OIT, 2006, p. 16), el explotador/proxeneta aparece perversamente como figura de protección, apoyo y autoridad, que imparte lecciones de sobrevivencia a los niños, niñas y adolescentes explotados. La ruta de ingreso a la ESCNNA, inicia por el explotador/proxeneta o abusador que conquista el afecto y admiración de la niña o el niño, crea dependencia o sumisión y se beneficia de estas respuestas, poniendo precio a la “protección dada” a un costo que sólo, según él, con el propio cuerpo puede pagarse.

En resumen, manifiesta que es esta una transacción entre personas con niveles de poder dispares, desigual capacidad de negociación y una muy diferente fuente de recursos económicos. Igualmente, además de aquellas diferencias, se encuentran en desigual grado de necesidad y por lo general, también lo son sus perspectivas y alternativas laborales.

Por otra parte, la prostitución como flagelo social está presente en todos los tiempos, en casi todos los países del mundo, y más aún, cada país ha adoptado diferentes posiciones dependiendo de su idiosincrasia, cultura y entorno social, lo cual ha conllevado a que esta práctica sea justificada por algunos, y al mismo tiempo, atacada por otros.

Según Álvarez-Correa y Suárez (1998, pág. 65) “el comercio del sexo, suele estar, en más de un 90%, asociado al consumo de drogas, bien sea alcohol, o cualquier otra sustancia relacionada, pues

el cliente exige, con frecuencia, que él o la joven tome o consuma con él”. Los resultados del estudio muestran como niños, niñas y adolescentes consumen frecuentemente alcohol y sustancias psicoactivas (SPA), como marihuana, inhalables, barbitúricos, hongos, bazuco, cocaína, heroína y éxtasis, entre las sustancias más comunes. Este hecho no sólo lesiona la salud de niños, niñas y adolescentes, sino que los hace más vulnerables a la explotación sexual, puesto que aumenta la necesidad de búsqueda económica para satisfacer el hábito de consumo o la posible adicción. Cuando han entrado en patrones de adicción, agravan su permanencia en la explotación sexual comercial, llegando a mayores grados de degradación y sometimiento.

Al respecto, Cárdenas y Rivera (2000 pág. 23) sostienen que factores familiares como el abandono, la separación marital, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el alcoholismo, la drogadicción, la pobreza extrema, entre otros, conforman un contexto de riesgo y vulnerabilidad específica para niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual. En dicho contexto de vulnerabilidad figurado por estos autores, el explotador/proxeneta aparece perversamente como figura de protección, apoyo y autoridad, que imparte lecciones de sobrevivencia a los niños, niñas y adolescentes explotados. Así, la ruta de ingreso a la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), inicia por el explotador/proxeneta o abusador que conquista el afecto y admiración de la niña o el niño, crea dependencia o sumisión y se beneficia de estas respuestas, poniendo precio a la “protección dada” a un costo que sólo, según él, con el propio cuerpo puede pagarse.

Vale la pena mencionar el estudio realizado por Aponte y García (2002 pág. 45) que explora las trayectorias y experiencias de vida de niñas, niños y adolescentes en situación de explotación sexual comercial en la ciudad de Bogotá, reconstruyendo perfiles psicológicos y escenarios para

ahondar y comprender las causas y los efectos de la problemática. Esta investigación muestra cómo la vida cotidiana de estos menores de 18 años se mueve en entornos y circuitos en los cuales interactúan con una gran cantidad y diversidad de actores: Clientes/explotadores en su mayoría hombres adultos, expendedores de droga, policía, instituciones de protección, así como adultos que también ejercen la prostitución, dueños de moteles y bares.

Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM, 2006) la trata de personas es una manifestación de violencia, sobre todo de violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones tales como física, psicológica y sexual: Se puede decir, que, en todos los casos, hay violencia psicológica que se manifiesta a través del control, sometimiento, amenazas y chantajes. Además de los casos de explotación sexual propiamente dichos, la violencia sexual puede estar presente, por ejemplo, en las modalidades de explotación laboral o los matrimonios serviles entre otras.

Esta misma Organización afirma que, cada año unos 2 millones de personas son víctimas de la trata, de las cuales el 80% son mujeres y niñas y 50% personas menores de edad. A esta cifra debe sumarse un número indeterminado de personas que son víctimas de la trata dentro de sus propios países, sin cruzar las fronteras internacionales y son sometidas a diversas formas de explotación.

En la actualidad, cualquier individuo puede comunicarse y emprender negocios con personas que se encuentran en otra parte del mundo, ya sean estos lícitos o no (Zúñiga, 2009: 61-62). En el caso específico de la trata de personas, especialmente la fase de reclutamiento, se ha visto beneficiada del uso de internet, ya que el traficante puede contactarse con las víctimas desde cualquier localización, emitir anuncios altamente atractivos que llegan a un mayor número de personas a la vez y, evitar más fácilmente la detección por parte de las agencias de seguridad del



Estado. Así, además, se reducen los gastos y aumentan los beneficios del grupo delictivo puesto que ya no es necesario dedicar tantos recursos al reclutamiento de la víctima.

De la misma manera, los traficantes están adaptando, tanto sus estrategias como la estructura del grupo al que pertenecen, a las legislaciones y actuaciones anti trata que se están planteando en los países, con el propósito de reducir los riesgos de su negocio (Surtees, 2008: 48). Con esta intención, los grupos delictivos cuentan entre sus integrantes profesionales expertos en el manejo de las nuevas tecnologías, así como en otro tipo de técnicas que aumentan la calidad de los métodos empleados y disminuyen la probabilidad de detección. Además, los traficantes también se adaptan a los mercados laborales de la región e intentan ofertar los mismos empleos que en ese momento se están ofreciendo desde las agencias legales, utilizando los mismos procedimientos con el fin de aumentar la complejidad en la detección de la ilicitud de la actividad (Heinrich, 2010, p. 3).

En este sentido, en la trata de seres humanos resulta cada vez menos necesario el uso de la violencia (Surtees, 2008: 60) porque los autores prefieren ejercer una influencia de tipo psicológico sobre las víctimas, la cual deja menos rastro palpable y por tanto menos evidencias de la actividad delictiva; sin embargo, el sentimiento de amenaza y coacción permanece.

La trata de personas presenta una serie de características que dificultan su estudio (Hernández y Rudolph, 2011, p. 2). En primer lugar, es un fenómeno que se produce a nivel transnacional, es decir, intervienen dos o más países en tal actividad. Las víctimas son trasladadas desde un país de origen hasta otro de destino, y a veces, en función de la distancia entre los mismos, pueden existir regiones de tránsito donde los autores deciden realizar una parada en el camino.

Por otro lado, y al igual que otras actividades vinculadas al crimen organizado, la trata de seres humanos es un delito que se ejecuta bajo una total clandestinidad, razón que también ha favorecido

la escasez de estudios entorno a este delito (Pomares Cintas, 2011). Según Stefanizzi (2007: 46) el término “clandestino” hace referencia a aquello que no es legal o explícitamente visible, tal como se presenta la trata de personas. Resulta altamente complejo obtener evidencias sobre su existencia, dimensión, actores que lo ejecutan e incluso víctimas, debido al ambiente donde se produce, tales como clubes ocultos donde las chicas y chicos ejercen la prostitución.

### **Causas y efectos de la prostitución infantil y la trata de menores.**

La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es una grave violación a los derechos humanos, siendo una práctica abusiva –y delictiva- que devasta la integridad física y psicosocial de niñas, niños y adolescentes. En ella, un adulto se aprovecha de la condición de vulnerabilidad (etaria, social, emocional, de género, entre otras) de una niña, niño o adolescente para satisfacer sus deseos sexuales, entregándole a cambio un pago en dinero, especies, regalos o algo tan intangible como amparo o protección. Si bien, un menor puede ser obligado a una situación de explotación sexual a través de la fuerza física o amenazas, sin embargo, también puede ser persuadido a participar en ese tipo de actividades sexuales como resultado de factores más complejos y con matices, ya sean humanos o situacionales, incluyendo un desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor (ECPAT I., 2016)

En términos generales se define la prostitución como el acto que involucra actividades sexuales, a cambio de bienes materiales, económicos y otros beneficios. De ahí se deriva la prostitución infantil, en la cual participan en la acción, menores de 18 años.



**Figura 1.** *Acceso carnal violento en menor de 14 años*

Los explotadores sexuales se aprovechan de la docilidad de los niños, ya que tienen menor capacidad para defenderse. Frecuentemente, esta actitud desviada es motivada por mentes perturbadas que buscan experiencias nuevas, o por la sensación de impunidad que proporciona el anonimato.

Es una forma de violentar a través de la explotación y victimización del menor, en la que mediante la utilización del cuerpo del niño y de su sexualidad, como mercancía, se lleva a una transacción entre el niño y el cliente, sea este nacional o extranjero, de forma organizada o no.

Además, en algunas culturas, la búsqueda de relaciones sexuales con niños está justificada por mitos y prejuicios. En Asia, por ejemplo, algunos hombres creen que el tener relaciones sexuales con niñas vírgenes muy jóvenes evita que contraigan VIH/SIDA, e incluso que tal acto cura esta enfermedad. Gran parte de los hombres también creen que el tener relaciones sexuales con una virgen aumenta su virilidad, su expectativa de vida, así como también que trae éxito en los negocios.

Algunas de las causas de este fenómeno son:

La miseria y la escasez son en numerosas ocasiones las razones que impulsan a los niños y jóvenes a realizar estas actividades sexuales como una salida desesperada, a la difícil situación económica actual.

Por las necesidades, los niños se ven obligados a dejar el ambiente familiar y a vivir en las calles teniendo carencias y necesidades, lo cual los hace altamente vulnerables, por lo que se convierten en el blanco perfecto de delincuentes, que les prometen trabajo y una remuneración.

### **Traumas por agresiones físicas/emocionales.**

Los abusos sexuales de que son víctimas los niños, niñas y adolescentes por parte de sus progenitores, familiares o relacionados, causan un trauma psicológico que no permite a los jóvenes desarrollarse normalmente y, en numerosas ocasiones, terminan en estas prácticas sexuales.

En un estudio realizado por. **Echeburúa** y de Corral (2006) sobre secuelas emocionales en víctimas de abuso sexual en la infancia, encontraron que al menos un 80% de las víctimas sufren consecuencias psicológicas negativas. El alcance del impacto psicológico va a depender del grado de culpabilidad que sufra el menor, así como de las estrategias de afrontamiento de que disponga la víctima. Ante este hecho, las niñas presentan reacciones ansioso-depresivas y los niños por otra parte, fracaso escolar y dificultades de socialización, así como comportamientos sexuales agresivos.

En este mismo sentido, los niños en la etapa de preescolar, presentan episodios de negación de lo ocurrido y los más grandecitos sentimientos de culpa y vergüenza. El abuso sexual presenta una especial gravedad en la adolescencia porque el padre puede intentar el coito, existe un riesgo real de embarazo y la adolescente toma conciencia del alcance de la relación incestuosa. No son

por ello infrecuentes en la víctima conductas como huidas de casa, consumo abusivo de alcohol y drogas, promiscuidad sexual, e incluso, intentos de suicidio.

Las menores víctimas de abuso pueden convertirse en potenciales agresores; suelen manifestar, además, conductas hipersexualizadas como la masturbación compulsiva, conductas seductoras, o un exceso de curiosidad por los temas sexuales. López (1995) indica que existen diferencias en cuanto a edad y género. Si las víctimas son niñas suelen manifestar depresión y ansiedad. En el caso de los niños puede ocurrir, que se manifiesten más agresivos o que se conviertan en abusadores de otros niños. Finkelhor (2000), afirma que existe una mayoría de abusadores menores, de sexo masculino; estos menores a los que nos referimos suelen imitar el abuso que ya han sufrido.

### **Baja autoestima o poca valoración personal**

En repetidas ocasiones al ser la adolescencia una etapa difícil y confusa, impulsa a los jóvenes a tener una valoración muy pobre de sí mismos ocasionando que incursionen en actividades sexuales con el ánimo de sentirse importantes o valorados.

La mayoría de los estudios que han examinado las secuelas a largo plazo del abuso sexual en la infancia enumeran numerosas dificultades psicológicas, conductuales y sociales en la edad adulta, que varían desde la depresión y baja autoestima hasta el abuso de sustancias y los trastornos de personalidad.

Durante la pubertad, la mayoría de los abusados y abusadas suelen padecer secuelas similares, entre las que destacan: fuertes dolores de estómago, dolores de cabeza, trastornos del sueño y de la alimentación, problemas de concentración, problemas menstruales, rechazo al propio cuerpo, baja autoestima, depresión, ansiedad, fobias, comportamientos auto agresivos y autodestructivos, llegando incluso a mutilarse con cortaduras, quemaduras y golpes.

**Secuestro o rapto infantil.**

Durante los últimos años, son muchos los casos reportados de niños, niñas y adolescentes, que son secuestrados, violados y obligados a prostituirse. Las organizaciones de prostitución utilizan apartamentos y casa de cuitas para retener a los menores. Una vez que han caído en uno de ellos comienza el verdadero calvario. Las niñas son encerradas, golpeadas y violadas por sus proxenetas durante varios días. De esta forma ninguna de ellas será virgen y habrá tenido varias experiencias antes de recibir a su primer cliente, a no ser que alguno de éstos esté interesado en una niña virgen. Por otro lado, las reprimendas y amenazas aseguran el silencio de las menores para que no denuncien a sus proxenetas. En ningún momento dejan de ser vigiladas y no pueden salir a la calle. Normalmente son obligadas a drogarse con sustancias psicoactivas para aumentar su rendimiento o para doblegarlas, convertirlas en drogadictas y hacerlas así dependientes del proxeneta.

**Crecimiento sustancial de embarazos no deseados.**

Son muchos los casos en que las jóvenes quedan embarazadas fruto de su vida sexual promiscua, algunas deciden dar a luz a su hijo o hija, siendo frecuentemente abandonados luego en las calles, o dados en adopción.

En relación al comportamiento de los nacimientos en el año 2014, fueron en total 659.202, de los cuales el 21,5% fue de madres entre los 15 y 19 años de edad, mientras que el 1% fueron niños y niñas con madres entre los 10 y 14 años. Debe señalarse que los nacimientos de hijos con madres de éste último grupo etario, aumentaron en un 0,7%, con respecto al año 2013, lo que puede estar en contravía de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, configurando posible comisión de delitos que afectan a esta población.

Al respecto, debe recordarse que la Constitución Política en su artículo 44 determina que los menores de 18 años serán protegidos contra toda forma de abuso sexual y que le corresponde a la familia, a la sociedad y al Estado garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, y a las autoridades competentes la sanción de los infractores. A su vez, el Código Penal en sus artículos 208 y 209 regula “las consecuencias punitivas de dos modalidades de conductas sexuales abusivas del que sean víctimas personas menores de 14 años: el acceso carnal y la realización de otros actos o prácticas sexuales -y la inducción a ellas” (Corte Constitucional, C-876/11).

La Corte Constitucional sentando jurisprudencia al respecto, plantea que mediante este articulado se materializa la protección consagrada en el artículo constitucional mencionado, toda vez que

*“El carácter abusivo de estos actos deriva de la circunstancia de ser realizados con persona que físicamente aún no ha llegado a la plenitud de su desarrollo corporal y especialmente, por tratarse de seres humanos que no han desplegado su madurez volitiva y sexual, prestándose para el aprovechamiento de personas que los aventajan en lo corporal e intelectual y precipitándolos precozmente a unas experiencias para los que no están adecuadamente preparados, con consecuencias indeseadas como el embarazo prematuro y la asunción de responsabilidades que exceden sus capacidades de desempeño social” (C-876/11).*

Según datos del DANE (2014), se ha incrementado el número de embarazos en menores de edad, siendo una de las principales causas, el abuso sexual. La tabla 3, muestra los municipios con mayores tasas de fecundidad en niñas entre 10 y 14 años.

**Tabla 1.**

Municipios con mayor tasa de fecundidad en niñas entre los 10 y 14 años de edad.

<b>Municipio</b>	<b>Departamento</b>	<b>Tasa</b>
Guayabetal	Cundinamarca	24
Puerto Carreño	Vichada	21,7
Sácama	Casanare	19,6
Puerto Gaitán	Meta	19,5
Murindó	Antioquia	19,4
Florencia	Cauca	17,8
Mutatá	Antioquia	17,5
Puerto Legizamo	Putumayo	17,1
El Bagre	Antioquia	17,1
Labranzagrande	Boyacá	15,5

*Nota: Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF. DANE – Estadísticas Vitales 2014\* cifras preliminares*

### **Problemas de salud para los/as implicados/as.**

Los implicados en las actividades sexuales, por lo general tienen problemas de salud debido a la promiscuidad sexual, al abuso del alcohol y las drogas, mala alimentación y otros factores que afectan el crecimiento y desarrollo del menor, produciendo envejecimiento prematuro, enfermedades respiratorias, circulatorias y nerviosas.





**Figura 2** *Problema de salud en los implicados en las actividades sexuales*

Por otro lado, encontramos que la trata de menores es otra causa que conduce a la prostitución constantemente y en todo el mundo, un gran número de niños son secuestrados e integrados en redes de prostitución contra su voluntad.

Es así como en los últimos cuarenta años, la industria del sexo se ha sistematizado y difundido por medio de las nuevas formas de comunicación, contribuyendo al desarrollo de la prostitución y, sobre todo, al aumento y la normalización de la pornografía.

### **Turismo sexual**

De igual manera, el turismo sexual, que involucra a los niños, es la explotación sexual de menores con fines comerciales, realizada por una o varias personas que viajan hacia otras provincias, regiones geográficas o países.

Desde hace muchos años, los guías turísticos son los que proporcionan las direcciones de los lugares donde se pueden obtener los servicios sexuales de niños, niñas y adolescentes. En la mayor parte de los casos, los niños prostituidos son controlados por proxenetas que se quedan con una porción de los ingresos que generan. Disminuir estas acciones es una tarea de gran dificultad.



**Figura 3.** Turismo Sexual

### **Enfermedades físicas y psicológicas**

En cuanto al daño físico, los niños, niñas y adolescentes inmersos en estas prácticas pueden padecer desgarres vaginales, dolores producto de golpes, infecciones, enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, entre otros.

Respecto al daño psicológico, los menores pueden presentar varios síntomas tales como depresión, confusión de la personalidad o de la orientación sexual, problemas de conducta (agresividad o enojo), problemas para dormir, pérdida de seguridad en sí mismos, desconfianza u odio hacia los adultos.

### **Rechazo por parte de la sociedad.**

Los niños, niñas y adolescentes víctimas de estas conductas punibles son objeto de repudio por parte de la sociedad, que los señala y los sanciona moralmente por cuanto su comportamiento está alejado de la moral y las buenas costumbres.

Los adultos que participen y sean encontrados en flagrancia serán condenados con las más fuertes penas legalmente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, los menores de edad serán enviados a un centro de atención especial, ya que por ser menores no pueden ser judicializados, acorde lo establece la Ley 1098 de 2006.

**Problemas sexuales:**

La normal vida sexual de los menores involucrados en estas prácticas se ve truncada, es disfuncional o inexistente, por cuanto la imagen de la misma es distorsionada debido a las circunstancias negativas que la rodean, "contaminan" la vida privada y destruyen la calidad de las relaciones que puedan tener.

La prostitución es el fenómeno principal en la generación de estos trastornos, y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución infantil son sólo fenómenos secundarios.

Aunque se tienda a confundirlos, la explotación y el abuso sexual en niños son fenómenos diferentes. El abuso sexual va relacionado con situaciones incestuosas, donde los mismos familiares son los victimarios. Las cifras que se manejan sobre esta problemática son producto del número de denuncias, sin que por ello coincidan con el de casos ocurridos.

La explotación sexual se presenta cuando se utiliza al niño como objeto sexual a cambio de algún beneficio económico. Las cifras que se conocen sobre este delito, provienen de las denuncias sobre casos específicos y de la detención, por parte de las autoridades, de focos de explotación. Sin embargo, estas fuentes cuantitativas tampoco garantizan el grado de ocurrencia.

La explotación y el abuso sexual en niños son realidades que no sólo afectan a la sociedad colombiana. Son problemáticas de carácter mundial que difícilmente se pueden categorizar o describir ya que en su desarrollo llevan implícitos factores que involucran otros fenómenos sociales como el consumo de drogas, delincuencia juvenil, la violencia intrafamiliar, entre otros.

Las diferencias sociales, el analfabetismo, la pobreza, la represión familiar, etc., son algunos de los factores que deterioran la calidad de vida de los niños. Sin embargo, no son elementos determinantes de todos los casos. La explotación y el abuso sexual en infantes no son realidades

propias de los pobres, ni de los desplazados en conflictos armados. Las clases sociales más favorecidas son igualmente víctimas de estos males, pero en la medida que los niños, niñas y adolescentes cuentan con la protección, apoyo y amor de sus padres, se minimiza el riesgo de caer en estas prácticas tan dañinas para la persona que la padece.

Otro aspecto importante es la escolaridad de los menores, pues en la medida que nuestros chicos y jóvenes estén asistiendo de manera regular a la escuela, se estén preparando, se reconozcan como seres humanos valiosos que merecen respeto y consideración de las personas que los rodean, que ocupan un lugar importante en la sociedad, es menos probable que se dejen tentar o involucrar en este tipo de actividades. En este sentido Álvarez, Moreno, Saker & Sandoval (2017), se identifican al expresar que las competencias ciudadanas deben generarse desde la infancia, incorporándolas a la vida cotidiana y escolar, de tal manera que interioricen desde los inicios de su vida, la importancia del respeto y la tolerancia por los semejantes y el reconocimiento de los derechos propios y ajenos.

Así, en una investigación realizada por UNICEF, se estima que en Colombia hay 18.000.000 de menores de edad, de los cuales aproximadamente 35 mil niños y niñas están vinculados a la explotación sexual. Según el mismo estudio, la edad en que se induce a la actividad se ha reducido incluso por debajo de los 10 años.

No obstante, para Elenita Motta, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las cifras sobre explotación sexual infantil son inciertas. “Es un problema clandestino, donde las labores de inteligencia no permiten conocer cifras claras. UNICEF habla de 35 mil víctimas, yo por mi parte no me atrevería a precisar ningún dato”.

Aunque, la actividad predominante continúa siendo la prostitución, se han presentado cada vez más casos de trata y utilización sexual en grupos armados ilegales.

**Políticas diseñadas por el gobierno a través de las instituciones del estado para disminuir, y en lo posible, erradicar el alto índice de la prostitución infantil en barranquilla.**

La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes –ESCNNA– existe en el mundo desde hace años; el afianzamiento a nivel mundial de un modelo social y económico, capitales, ha generado un contexto específico para la existencia y el desarrollo de esta nefasta práctica.

Al mismo tiempo, ha ido surgiendo y consolidándose en diferentes sectores de la sociedad la conciencia de que esta situación es intolerable. Las naciones del mundo han asumido a los menores de 18 años como sujetos plenos de derechos, expresados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño –CDN–, uno de los cuales es la protección contra cualquier forma de explotación. La protección integral de niños, niñas y adolescentes (NNA) es hoy un imperativo moral y jurídico, del cual son responsables el Estado, la sociedad y la familia.

Actualmente la ESCNNA es considerada como una forma de esclavitud y un crimen de lesa humanidad en los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, adoptados y ratificados por muchos países que hoy disponen de un marco ético y jurídico inequívoco para combatirla.

En Colombia existe ya una experiencia acumulada sobre la lucha contra la ESCNNA, con algunos logros significativos: Participación y trabajo conjunto de diferentes sectores de la sociedad civil con el sector público y privado. Diferentes sectores de la sociedad han confluído en espacios de reflexión, organización, acción y definición de políticas públicas en torno al tema. Han participado en acciones o programas conjuntos con entidades del Estado a nivel nacional, departamental y local, representantes de los órganos legislativos y de control estatal, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad

civil, organizaciones de jóvenes, comunidades educativas y religiosas, sector empresarial turístico, universidades, medios de comunicación, organismos de cooperación internacional, entre otros. Esta confluencia de voluntades y acciones es la base para el desarrollo efectivo de la corresponsabilidad social, que no reemplaza al Estado en su responsabilidad central frente al problema.

Por otra parte, se han desarrollado estudios diagnósticos, análisis locales, regionales o sectoriales, avanzando en el desarrollo de metodologías de recolección de información sobre la ESCNNA, y de detección y clasificación de la pornografía infantil a través de Internet. Estos avances a su vez han permitido ver las carencias que existen en esta línea y la necesidad de un conocimiento más profundo y sistemático al respecto.

Hoy el país cuenta con importantes instrumentos legales para combatir la ESCNNA. Actualmente se discute un nuevo proyecto de ley de niñez y adolescencia, entre otras iniciativas, además de la existencia de servicios y/o programas de atención a los y las víctimas, así como programas de atención organizados y ejecutados por ONGs, por diversas Iglesias o delegados por el Estado y servicios de atención donde trabajan conjuntamente administraciones locales con el apoyo de organismos de cooperación internacional en la atención tanto a víctimas de ESCNNA, como de otras formas de violencia sexual. En este terreno la experiencia ha sido amplia, aunque se requiere aún de mayores esfuerzos y recursos para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la atención.

En cuanto a la incidencia sobre transformaciones culturales y formación de tejido social. Se ha realizado un trabajo con los medios de comunicación, tendiente a sensibilizar a la comunidad y a develar mitos y prácticas culturales que sustentan la permisividad ante la ESCNNA. Se han realizado campañas, foros y actividades de capacitación a líderes juveniles o comunales

orientadas a formar multiplicadores en la prevención e intervención de la trata con fines sexuales, el abuso y la explotación sexual. También se ha impulsado la creación de redes institucionales y de organizaciones sociales dirigidas a construir un tejido social cada vez más participativo en contra de la ESCNNA, incluyendo algunas experiencias de organización de NNA como multiplicadores en prevención. Lo anterior no significa que exista unanimidad de enfoques o perspectivas; por el contrario, el tema ha sido abordado desde distintas miradas: primero como una de las situaciones irregulares de la niñez; luego como una violación de los derechos de la niñez, estipulados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN). Hacia finales del siglo pasado, la referencia fue la violencia sexual, materializada en la Política HAZ PAZ, centrada en el abuso sexual. Por otro lado, tras la adopción del Convenio 182 de la OIT surge la perspectiva de las peores formas de trabajo infantil. En los últimos años se ha relevado la perspectiva de la garantía de los derechos de los menores de 18 años (Ley 679 de 2001), considerando lo planteado en la Declaración de Estocolmo. También se ha abordado el tema desde la lucha contra la Trata de Personas (Leyes 747 de 2001 y 985 de 2005).

### **Políticas**

Las diferentes políticas, estrategias y planes nacionales ilustran sobre el terreno recorrido en Colombia para combatir esta problemática en especial en Barranquilla:

- a) Plan de Acción en favor de los Derechos de la Infancia Explotada Sexualmente y contra la Explotación Sexual Infantil de 1997

Proponía una serie de estrategias que involucraban a sectores gubernamentales y no gubernamentales en las líneas de sensibilización e información a través de medios masivos, con el fin de prevenir los factores facilitadores de esta problemática y propiciar cambios socioculturales; el diseño y puesta en marcha de Sistemas de Vigilancia y Control a través de acciones de la Policía y la comunidad, y sistemas de atención con un modelo que respondiera a la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Contemplaba una línea jurídica, que integraba el marco normativo internacional y nacional de protección y garantía de los derechos de los NNA; una línea investigativa, la cual planteaba desarrollar el estado del arte sobre el tema y contribuir a la comprensión del problema, y una línea institucional que apuntaba al fortalecimiento del Estado que garantizara su acción eficaz en la solución del problema. Este Plan se desarrolló de manera parcial y desarticulada, de acuerdo con las competencias de cada institución, pero no tuvo un proceso de coordinación y seguimiento apropiados que permitieran alcanzar los objetivos propuestos ni evaluar su impacto.

- b) Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar HAZ PAZ

Su objetivo es la construcción de paz y convivencia familiar, y la consolidación de familias democráticas, tolerantes de las diferencias, respetuosas de la dignidad y de los derechos de sus miembros, como estrategia fundamental para prevenir el abuso sexual de niños y niñas.

Sus objetivos específicos se resumen en:



- Prevenir relaciones violentas al interior de la familia mediante la promoción y fortalecimiento de factores que ayuden a la convivencia a través de la educación, la cultura, la recreación y la generación de espacios amables.
- Garantizar la acción oportuna de las instituciones en la detección temprana y la atención preventiva de la violencia intrafamiliar.
- Garantizar la calidad, disponibilidad, acceso y utilización de los servicios de salud, justicia, seguridad y protección para la atención de casos.
- Desarrollar modelos para la rehabilitación psicosocial de los abusadores.
- Mejorar el conocimiento sobre la explotación sexual y las formas de intervenirla.
- Fortalecer la coordinación, seguimiento y evaluación interinstitucional y comunitaria de los programas y servicios en los niveles territoriales.

La política HAZ PAZ se operacionaliza a nivel nacional, regional y local, con participación de las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) en cuatro componentes: prevención, detección temprana y vigilancia, atención y transformación institucional.

c) Política Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Joven Trabajador

Surge en 1995 con la creación, por decreto presidencial, del Comité Interinstitucional, encargado de formular y ejecutar la política en la materia; está integrado por 22 instituciones gubernamentales, representantes de trabajadores, empleadores y ONG; la Secretaría Técnica la ejercen el Ministerio de la Protección Social y el ICBF. Con la asistencia técnica y cooperación de la OIT, la política se ha materializado en 3 planes desarrollados entre 1996 y 2006; el Tercer Plan, vigente, prioriza la prevención y erradicación de las peores formas de trabajo infantil a través de cinco líneas de acción: diagnóstico, desarrollo legislativo, transformación de prácticas culturales, fortalecimiento de la política pública y atención directa a niños y niñas vinculados o

en alto riesgo de vinculación. Se han formulado planes en todos los departamentos del país, un alto porcentaje de los cuales priorizó la ESCNNA como problemática urgente de abordar.

En el marco de este Plan se inició en el 2004 el proceso Estructuración de redes sociales para la prevención de la explotación sexual comercial infantil a través de un programa de formación, liderado por el Comité Técnico Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil; su objetivo es implementar y evaluar un programa piloto de formación para la prevención y detección de la ESCNNA y el fortalecimiento de redes sociales. Igualmente, y también con el apoyo de la OIT, se ejecuta el Proyecto Tejiendo Redes contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual desarrolla acciones en todas las líneas de la política nacional y focaliza intervención directa en Bogotá y Medellín, con el objetivo de retirar a los niños y niñas que se encuentren vinculados a la explotación sexual comercial y prevenir el ingreso de quienes se encuentren en alto riesgo.

#### **Política nacional de salud sexual y reproductiva 2003-2006**

Liderada por el Ministerio de la Protección Social, su objetivo es mejorar la salud sexual y reproductiva de toda la población, con especial énfasis en la reducción de los factores de vulnerabilidad y los comportamientos de riesgo, el estímulo de factores protectores y la atención a grupos con necesidades específicas.

Plantea las siguientes estrategias: promoción de la salud sexual y reproductiva a través de información, educación, comunicación y coordinación interinstitucional; fortalecimiento de la gestión institucional y de la participación, potenciación de redes sociales de apoyo y desarrollo de la investigación.

#### **Atención integral a las víctimas de ESCNNA**

El ICBF, en coordinación con entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil, presta el servicio de protección a NNA cuando se encuentran en situaciones de vulneración de

sus derechos. Para el caso específico de NNA en situación de explotación sexual comercial, este servicio se presta en dos modalidades: en medio socio-familiar (ambulatorios) y en medio institucional (internado).

Estos desarrollos, que reafirman la existencia de la problemática, sustentan el propósito de avanzar hacia la construcción de una política pública para la erradicación de la ESCNNA, mediante un proceso concertado y participativo que atienda los diferentes ámbitos de lo nacional, lo regional y lo local; que realice prevención, pero también proteja, que establezca garantías y preste la debida atención a las víctimas. Tal propósito se concreta en la adopción de un Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la ESCNNA proyectado a cinco años que hace parte de la política social de protección y de la política pública de infancia.

Con la adopción de este Plan Nacional se quiere cumplir con las obligaciones que el Estado ha asumido a nivel internacional al ser firmante de la Agenda de Acción de Estocolmo, ratificada en Yokohama, y las distintas recomendaciones que varios organismos internacionales le han hecho en este tema. El Plan también está orientado al cumplimiento de los deberes constitucionales hacia los menores de 18 años, la sociedad civil y las familias.

En Colombia, quien dirige las estrategias en la lucha contra estas problemáticas es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que tiene como misión prioritaria administrar los ingresos provenientes del Presupuesto general de la Nación para canalizarlos hacia actividades de protección y atención a la población infantil afectada.

Con el ICBF colaboran otras organizaciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Delegada para la defensa del menor y la familia, las Instituciones de vigilancia y control, la Unidad de Delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana de la Fiscalía General de la Nación, entre otras.

Elenita Motta, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, afirma que hay un compromiso gubernamental para atacar ambas problemáticas. En el caso de la explotación infantil, sostiene que existe un pacto entre las autoridades nacionales competentes y organismos internacionales para la captura y detención de las bandas que se dedican a explotar niños. Sin embargo, reconoce que los recursos no son suficientes para lograrlo.

En lo que corresponde al abuso sexual infantil, sostiene que, en el marco de la Política Nacional de Paz y Convivencia Familiar, se atiende de forma especializada a los niños víctimas y a sus agresores. “Estamos estableciendo un modelo de atención integral a las víctimas de la violencia y a sus familiares, para ello contamos con equipos psicosociales y defensores de familias, además de otras organizaciones gubernamentales dentro de la misma infraestructura, como la Fiscalía, el Ministerio Público, entre otras”.

La cuantificación y los hechos permanentes de la violencia intrafamiliar y sexual permiten al Estado y a la sociedad en su conjunto evidenciar públicamente las problemáticas que subyacen en las familias y construir estrategias y políticas que garanticen los derechos humanos de los niños, las niñas y de otros miembros de la unidad familiar igualmente vulnerados por este tipo de violencias: las mujeres, los adultos mayores y los discapacitados. Particularmente, también cuando las familias se encuentran en condición de desplazamiento.

A pesar de los esfuerzos de las instituciones competentes para ayudar a las víctimas y crear conciencia sobre las consecuencias de estos fenómenos, la explotación y el abuso sexual en menores, son una problemática en ascenso.

En materia de explotación infantil, Guillermo Camacho, de la Asociación Afecto, considera que los planes de acción orquestados por el Ejecutivo Nacional carecen de recursos económicos para impulsar una verdadera fuerza especializada en atacar casos de explotación. Según el

funcionario de la ONG, “los recursos y las autoridades son precarias, necesitamos una policía transparente y capacitada para esta lucha, ya que quienes ejercen la explotación infantil pertenecen a redes criminales poderosas de alcance internacional que manejan altas sumas de dinero (...) falta que el Estado invierta en la niñez, pareciera que estuviera de brazos cruzados. Colombia necesita un doliente con recursos y tecnología para darle un zarpazo final a las bandas de explotadoras que tienen azotados a nuestros niños”.

Según datos de la Agencia Periodismo Amigo de los Derechos de la Infancia (Pandi), las últimas cifras sobre abuso infantil en Colombia son:

Durante 2006 el abuso sexual infantil en Colombia aumentó en un 6% respecto al año anterior.

- El rango más alto se encuentra en niños y niñas entre 5 y 14 años de edad.
- Bogotá y Antioquia son identificadas como las zonas en donde más se cometen abusos.
- Se denunciaron 14.840 casos ante Medicina Legal en el último año.
- El 86% de las víctimas de abuso sexual que se presentan en Medicina Legal son menores de edad.
- 12.247 niñas y 2.593 niños fueron abusados sexualmente durante el año pasado.
- 3 de cada 100 menores asistieron a Medicina Legal por abuso sexual.
- El silencio es la cifra más importante pues se estima que el 70% de los casos no es denunciado por temor, conflictos sociales o coerción.
- Existen 2.406 casos reportados indirectamente por institutos médicos o servicios sociales obligatorios.
- Cada 14 minutos se presume que se presenta un caso de abuso sexual contra un menor de edad en Colombia, que es denunciado. Se cree que la cifra de casos no denunciados es mucho mayor.

Se estima que sólo un 30% de los casos se denuncian, pues en ocasiones, el agresor es un miembro cercano de la familia del menor, que muchas veces cuenta con la complicidad o mutismo del resto de familiares, bien sea por miedo, o por considerarse esta práctica delincuencia como un problema insignificante. Por otro lado, el abuso infantil de tipo sexual tiene muchos matices, tanto físicos como psicológicos, y no sólo el de la violación carnal per se.

Por ello, resulta importante aprender a “leer” algunas señales que ayudan a determinar cuando un niño ha sido víctima de abuso sexual. Según el investigador Víctor Solano, las siguientes son algunas pistas a considerar.

**En el físico:**

- Dificultades para caminar o sentarse.
- Ropa rota, especialmente la interior o presencia de sangre en ella.
- El niño empieza a tocarse mucho, jalarle el pantalón o la falda, repetitivamente.
- Trauma en los senos, nalgas, parte baja del abdomen, en los muslos. · Embarazo
- Durante juegos, clases de educación física, práctica deportiva, etc., hay movimientos que se le dificultan al niño o niña.
- Infecciones venéreas. La más común es el condiloma que se presenta como una verruga dolorosa que se deben tratar con cremas o cauterizaciones.
- Cuando el niño es portador lo acompañarán siempre, especialmente cuando se le bajen sus defensas.

**En lo emocional:**

- El niño puede volverse muy retraído y silencioso, algunos desarrollan mutismo. O por el contrario, su comportamiento es agresivo en exceso.
- Repentina caída en el rendimiento académico.

- Alucinaciones visuales, táctiles o sensoriales en general.
- Depresión permanente.
- Ponerse ropa sobre ropa, necesidad de utilizar muchas prendas de vestir para dificultar el abuso.
- Después de que el niño ya aprendió a ir al baño vuelve a la etapa de no controlar esfínteres. En algunos casos puede retener las heces para que el abusador sienta incomodidad y no lo intente nuevamente.
- Aversión al acto de acostarse, sueños alterados o con pesadillas, no quiere dormir solo, ni que lo dejen solo en su habitación.
- En relación con otros niños, sus relaciones son pobres: no participan en sus juegos o son demasiado complacientes.
- Son “demasiado juiciosos o juiciosas” porque se acostumbraron a complacer.
- No les gusta ir a visitar la casa de algún familiar o amigo. Quiere evitar los viajes familiares o las reuniones.
- Comportamientos y comentarios de adulto con referencias sexuales.
- Terminan huyendo del hogar y acercándose peligrosamente a la prostitución o al suicidio.

UNICEF, tiene como meta lograr una erradicación total de estos fenómenos, garantizándole a la población infantil protección absoluta ante cualquier tipo de explotación y abuso. Para ello, considera importante aprovechar el aparato legislativo que respalda a las víctimas (las leyes 360 de 1997, 575 de 2000 y de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer). Además, estima necesaria darles mayor cobertura mediática a las problemáticas, sin hacerle daño a los menores, con el fin de informar y sensibilizar a la

opinión pública sobre las gravísimas consecuencias de estas actividades en las generaciones futuras.

Sin embargo, a juicio de Liliana Burbano, del Departamento de Comunicaciones del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Ipec), para disminuir y erradicar estos fenómenos, es necesario transformar los patrones culturales. Según Burbano, de nada sirve establecer planes de acción en contra del abuso y explotación infantil, si la sociedad, incluyendo a las autoridades competentes en estos planes, no deja de considerar a los niños y a las mujeres como actores débiles, sin credibilidad para defenderse. “En ocasiones los agresores se escudan argumentando que las jóvenes los sedujeron, y los fiscales toman esos elementos en cuenta a la hora de procesarlos, no se logra nada con las leyes, si no se supera el imaginario cultural machista”.



**Corresponsabilidad del estado y la familia**

El Estado Colombiano, el cual como señala Hernández (2007, p. 557), debería actuar para el beneficio del interés de la ciudadanía cuando se auto-define como representante del colectivo, ha adquirido obligaciones que emanan primero bajo el criterio de los derechos humanos, según la Constitución Política Colombiana, reconocida como derecho fundamental la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas expresada en el artículo 17 y en segundo término, lo estipulado en el artículo 93 de la misma carta magna, parágrafo segundo conocido como bloque de constitucionalidad, de conformidad con todos los tratados internacionales, así las cosas, y teniendo en cuenta que la trata de menores interna y más allá de las fronteras, incluyendo como base la prostitución infantil, es” el acto de captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, con el propósito de explotación, y sacar provecho para sí o para un tercero, de las cualidades, capacidades o sentimientos de la víctima, ya sea de manera económica o de cualquier forma”, es la meta que el Estado como garante de la sociedad, debe implementar para evitar que este delito prospere por la falta de reconocimiento conceptual tanto por las instituciones como por la sociedad en general.

El Estado sabe que los enfoques que debe atacar son: La delincuencia organizada nacional o transnacional, violación de los derechos humanos y, desde una óptica superior, el género y con ello, la mujer como víctima.

Bajo ese punto de vista, el ideal como programa preventivo debe ser:

- Establecer programas de prevención, dirigidos a comunidades vulnerables a la trata de personas y a niños, niñas y adolescentes respecto a la prostitución infantil.
- Organizar y desarrollar en forma permanente actividades de capacitación con el fin de informar y actualizar a los servidores públicos sobre los aspectos relacionados con la

forma como opera el crimen organizado nacional y transnacional respecto al tema de trata de menores y prostitución infantil.

- Implementar programas de sensibilización pública para dar a conocer la problemática de la trata de menores y la prostitución infantil y,
- Promover la información relacionada con los peligros de la migración internacional bajo condiciones de vulnerabilidad, riesgos, irregularidad o ilegalidad, que tengan relación con niños, niñas y adolescentes inmersos potencialmente bajo este flagelo.

Esa obligación del Estado prevenir y evitar la ocurrencia de estas conductas ilícitas, y por consiguiente al no ser eficiente con el tema producto de este trabajo, plasma de manera categórica su corresponsabilidad al permitir que los delincuentes actúen desmedidamente y, en algunas ocasiones, con la connivencia de funcionarios estatales.

Ahora bien, respecto a la corresponsabilidad de la familia en torno al tema de la trata de menores y la prostitución infantil, debe ser una prioridad, inculcarles valores sobre dignidad humana y moralidad, haciéndoles ver que el cuerpo es sagrado y nadie puede abusar de él, labor que debe ser compartida con los docentes en calidad de segunda familia, pero, lamentablemente la orientación escolar en plena era de la tecnología avanzada, todavía es un tabú y, paulatinamente se va dejando el camino libre para que niños, niñas y adolescentes caigan en la redes de traficantes organizados que se lucran vilmente de un negocio que puede evitarse solo con la adecuada educación que se imparta en los hogares, las instituciones escolares y por supuesto. con la supervisión de la sociedad civil, que, como base fundamental para una sana convivencia, debe dar el campanazo de alerta a la primera intención de cualquier persona o grupo organizado que pretenda lucrarse de este negocio, dando aviso a las autoridades y evitando así

que ocurra la comisión del delito, empero, muchas veces también, esa sociedad que debe permanecer vigilante, también falla.

Y como punto final sobre la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en el tema de trata de menores, y prostitución infantil respecto a su prevención, ocurrencia y sanción, manifestamos que en este último punto, nuestra legislación contempla sanciones para ambos delitos tipificados como trata de personas, en el artículo 188A, del Código Penal Colombiano o Ley 599 de 2002, adicionado por la Ley 747 y modificado por la Ley 985 de 2005, artículo 3º así:

*“El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales, entendiéndose como explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación”.*

Lo mismo sucede con la prostitución infantil, tipificado como Inducción a la prostitución en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 213 de la ley 599 de 2002, modificado por la ley 1236 de 2008, art 8º que taxativamente dice:” El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de diez(10) a veintidós(22) años y multa de sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes “, con el agravante punitivo de que se aumentara la

pena de una tercera parte a la mitad, cuando la conducta se realice en persona menor de catorce (14 ) años, de acuerdo al numeral primero del artículo 216 del código penal colombiano o ley 599 de 2002, modificado por la ley 1236 de 2008, en su artículo 10.

### **3. Marco Histórico**

La trata de personas constituye una de las formas de esclavitud del siglo XXI en el mundo globalizado contemporáneo. Es un delito que ocupa el tercer lugar en la lista de crímenes transnacionales, situado después del tráfico de drogas y el de armas, aunque las estimaciones señalan que, en la presente década, la trata de personas va a ocupar el primer lugar por las increíbles ganancias y los beneficios económicos. (UNODC pág. 29)

La trata de personas es una de las modalidades de explotación. Es una violación a los derechos humanos y un delito en el que la víctima puede ser cualquier persona, ya que involucra a niños, niñas, mujeres y hombres que, mediante el sometimiento son llevados a la prostitución, al trabajo forzado, a matrimonios obligados, a servidumbre, a la explotación sexual y a prácticas esclavistas de distinta naturaleza. Es un delito conectado con otros delitos como el secuestro, las desapariciones, la falsificación de documentos, la violencia y el abuso físico y sexual, la corrupción, el tráfico y el abuso de drogas (UNODC, p. 36).

A través del tiempo, el concepto de trata ha sido interpretado de diferentes maneras por organizaciones, gobiernos y la sociedad en general. Para esclarecer el panorama sobre los antecedentes del fenómeno de la trata de personas, es necesario remontarse a los diferentes períodos históricos.

La trata, especialmente de mujeres, tiene raíces profundas en la historia de la humanidad, pues desde sus inicios ha estado ligado a las guerras, a la esclavitud y a la consideración de las mujeres como objetos sexuales y así fueron traficadas durante el período colonial, especialmente las africanas y las indígenas fueron sacadas de sus lugares de origen y comerciadas como mano de obra, servidumbre y/o como objetos sexuales. El objetivo sexual siempre estuvo presente y se daba

dentro del mercado matrimonial o con otras figuras como concubinas, o simplemente mujeres a libre disposición de los patrones.

Durante el periodo de la esclavitud estaba prohibida la “trata de blancas”. Ello significaba que se podía explotar a cualquier persona de cualquier color de piel, morena, mulata, negra, mestiza, entre otras, menos aquellas que tuvieran tez blanca. Sin embargo, con la abolición de la esclavitud esta práctica fue prohibida para cualquier tipo de persona independientemente de su origen, identificación religiosa o étnica. Por ello, actualmente no se dice Trata de Blancas, ya que éste es un término obsoleto, en la actualidad la denominación correcta es trata de personas<sup>3</sup>.

En la época colonial mujeres y niñas, particularmente africanas e indígenas, eran desarraigadas de sus lugares de origen y comerciadas como mano de obra, servidumbre y/o como objetos sexuales. Pero la trata como problema social comenzó a reconocerse a fines del siglo XIX e inicios del XX a través de lo que se denominó trata de blancas, concepto que se utilizaba para hacer referencia a la movilidad y comercio de mujeres blancas, europeas y americanas, para servir como prostitutas o concubinas, generalmente en países árabes, africanos o asiáticos. En ese momento surgieron las primeras hipótesis en torno a que dichos movimientos eran producto de secuestros, engaños y coacciones sobre mujeres inocentes y vulnerables con el objeto de explotarlas sexualmente. Los discursos sobre la “trata de blancas” fueron utilizados y hasta cierto punto monopolizados por el movimiento abolicionista de la prostitución, cuya lucha se centraba en su erradicación al considerarla una forma de esclavitud de la mujer (OEA – OIM, 2006, p. 9).

En América Latina esta situación se ubica en la época de la conquista española, ya que en cumplimiento de la ley de guerra, los españoles tomaban o entregaban el “botín de mujeres” al

---

<sup>3</sup> Ministerio del Interior. Origen de la trata de personas.

vencedor, lo que dio origen al comercio sexual, al punto que se crearon establecimientos para este tipo de actividades<sup>4</sup>.

Con posterioridad, en la colonia, surgieron las primeras normas que sancionaban dicha actividad con penas, que incluso, llegaban hasta la muerte. A fines del siglo XIX, especialmente a partir de 1900, persistió el fenómeno de la trata de mujeres que se agudizó después de cada guerra mundial, siendo también víctimas las mujeres europeas, que huyendo del hambre y de los horrores de la guerra, fueron presa fácil de los traficantes, siendo utilizadas con fines de explotación sexual y trasladadas como concubinas o prostitutas, a países de Europa del Este, Asia y África, lo que llevó a denominar a dicha actividad como *trata de blancas*, porque se reclutaba a mujeres blancas, europeas y americanas que eran comerciadas hacia países árabes, africanos o asiáticos, como concubinas o prostitutas<sup>5</sup>.

Las primeras referencias de la trata provienen de los instrumentos de las Naciones Unidas. En 1904 el primer convenio internacional referido al tema, fue el Acuerdo Internacional sobre Represión de Trata de Blancas que se centraba sólo en la protección de las víctimas y resultó ineficaz. La trata era conceptualizada como movilización de mujeres asociada a la esclavitud, pero ligada estrechamente a fines “inmorales” (prostitución) y requería el cruce de fronteras nacionales, ya que se consideraban a las mujeres como esclavas, y por lo tanto se podían utilizar como instrumentos de explotación sexual (Henao, 2008).

Para el año 1910 se aprobó la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Blancas, que obligó a los países firmantes a castigar a los proxenetas y se amplió la definición para incluir el comercio interno de mujeres en los países, estrechamente vinculada con la esclavitud.

---

4 Recorrido histórico sobre la trata de personas Mariblanca Staff Wilson Panamá.

5 Ibid, pag 2

Sus acciones se cristalizaron en la agenda mundial a través de diversos acuerdos internacionales para la supresión de la Trata desarrollados desde 1904 y hasta 1949, año en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena.

Al inicio de la década de los 80, después de varios años de silencio, los discursos sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual volvieron a tomar fuerza entre distintos sectores nacionales y supranacionales, debido entre otras razones, al incremento de la migración femenina transnacional que se venía gestando desde fines de los años 70, dentro de la cual parece aumentar, o al menos hacerse más evidente, la incidencia de este fenómeno en casi todas las regiones del mundo y en muy diversas modalidades. De esta manera la antigua definición de trata de blancas quedó en desuso por no corresponder ya a las realidades de desplazamiento y comercio de personas y tampoco a la naturaleza y dimensiones de los abusos inherentes a este flagelo (OEA – OIM, 2006, p. 9).

La Trata de Personas ha evolucionado a lo largo de los años. Convirtiéndose este delito en la nueva forma de esclavitud de siglo XXI, ya que vulnera la casi totalidad de derechos de las víctimas. Por otro lado, los avances tecnológicos han permitido informar con amplitud su expansión y múltiples formas en todo el orbe. Es frecuente encontrar en los medios de comunicación y sobre todo en Internet noticias que abordan los siguientes temas:

- Trata de mujeres para el mercado matrimonial, entre países asiáticos o desde Latinoamérica, Asia y África hacia Europa, Japón y los Estados Unidos.
- Caravanas de mujeres movilizadas en contra de su voluntad o bajo condición de trata e instaladas en las cercanías de bases militares para entretenimiento y uso sexual de oficiales y soldados.



- Mujeres en condición de trata explotadas como mano de obra barata y que trabajan sin ninguna protección laboral en sectores específicos como el empleo doméstico o la industria sexual.
- Mujeres ofrecidas como esclavas en sitios de Internet, donde se les promociona explicando su capacidad y resistencia al dolor, a la tortura y todo lo que puede hacerse con ellas.
- Miles de mujeres atraídas por un supuesto contrato de trabajo rentable y que terminan destinadas a burdeles o clubes nocturnos de diferentes lugares del mundo.
- Mujeres y niñas provenientes de áreas rurales que son vendidas y coaccionadas para llenar la demanda de turismo sexual.
- Anuncios y promociones turísticos sobre mujeres y niñas exóticas a las que se puede acceder fácilmente en un vuelo chárter con todo incluido.

El aumento en el número de casos, así como su expansión en áreas que anteriormente no parecían verse tan afectadas, responde en parte a factores como la globalización, que ha facilitado las comunicaciones y el acceso a la información. Pero también a las profundas dificultades económicas que enfrentan muchos países -especialmente las naciones en desarrollo y las economías en transición- y su consiguiente inestabilidad socioeconómica, lo que tiende a producir circunstancias de “expulsión” como el desempleo y/o empleos mal remunerados, falta de oportunidades educativas y desarrollo social, así como las limitadas posibilidades de acceso a los servicios de salud y educación. A ello se suman los cada vez mayores obstáculos a la migración regular y la existencia de conflictos armados sean estos nacionales o regionales.

Esta situación, aunada a cuestiones como la creciente demanda de mano de obra de bajo costo en los países de destino, vacíos legales en la mayoría de los Estados y falta de una visión integral

para combatirla, han hecho de la trata de personas uno de los tres negocios más rentables del crimen organizado, después del tráfico de armas y de narcóticos.

La trata de mujeres debe entenderse en el amplio contexto de desigualdad y violencia estructural a las que está sujeto este grupo demográfico, sin importar su edad, raza o situación socio-económica. En todas las sociedades, en mayor o menor grado, las mujeres y las niñas enfrentan constantes violaciones a sus derechos humanos y/o a sus derechos económicos. En general, las mujeres están más afectadas por la violencia y la discriminación de género, en la educación, la inequidad laboral, caracterizada por la segregación ocupacional y una representación desproporcionada en los sectores informales de empleo. Todo ello trae como consecuencia una muy particular vulnerabilidad, así como una enorme inseguridad económica, y por lo tanto, la propensión a migrar, generalmente en forma irregular, a pesar de los riesgos e implicaciones que esto conlleva (OEA – OIM, 2006, p. 11).

### 3.1 Marco Conceptual

A continuación, se definirán los conceptos más relevantes y recurrentes esbozados en el siguiente trabajo, tales como:

**Explotación Sexual Infantil:** Violación fundamental de los derechos de la niñez. Abarca el abuso sexual por parte de un adulto y remuneración en dinero o en especie para el niño/a o para una tercera persona o personas. El niño/a es tratado como objeto sexual y como mercancía. (UNICEF. La niñez colombiana en cifras 2012).

**Esclavitud:** Estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. La trata de esclavos comprende todo acto de captura, adquisición o cesión de un individuo para venderle o cambiarle; todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo, adquirido para venderle o cambiarle, y en general todo acto de comercio o transporte de esclavos (Declaración de Bruselas 1919).

**Prostitución Infantil:** Situación en la que un adulto utiliza a niños en sus prácticas sexuales a cambio de un pago (Artículo 218-Ley 599, Modificado por el art. 24, ley 1336 de 2009).

**Trata De Personas:** Captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para propósitos de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas

análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos (Diccionario académico jurídico, 2016).

**Tratante:** Grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material (Diccionario académico jurídico, 2016).

**Violencia Sexual:** Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción, independientemente de la relación de ésta con la víctima y en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo (Organización Mundial de la Salud, 2010).

**Víctimas:** Personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente (Diccionario académico jurídico, 2016).

**Proxenetismo:** Delito contra las buenas costumbres, consistente en el fomento de la prostitución a través de la administración, regencia o sostenimiento de lupanares u otro lugar donde se ejerza, por cualesquiera actos de favorecimiento o tercería, la prostitución ajena (Diccionario académico jurídico, 2016).

El lamentable negocio de la prostitución infantil y la trata de personas, se ha incrementado de tal manera que los intermediarios han ideado diferentes formas de explotarlas a fin de hacerles el quite a la justicia, como lo son las casas clandestinas o el anzuelo de un trabajo en el exterior. A eso tenemos que el Código Penal de Colombia, en su artículo 217 consagra que:

“El que destine, arriende, mantenga, administre o financie casa o establecimiento para la práctica de actos sexuales en que participen menores de edad, incurrirá en prisión de diez (10) a catorce (14) años y multa de sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima”.

Le corresponde al Congreso de la República, en virtud de la cláusula general de competencia normativa, la potestad de desarrollar los mandatos superiores a través de la expedición de disposiciones legales que incluye la facultad de legislar sobre cuestiones penales y penitenciarias, por lo que al legislador le compete el diseño de la política criminal del Estado para determinar las conductas que constituyen delitos, las sanciones que deben imponerse y el procedimiento a cumplirse, por lo que bien puede el Legislador crear, modificar y suprimir figuras delictivas; introducir clasificaciones entre las mismas; establecer modalidades punitivas; graduar las penas que resulten aplicables y fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de atenuación o agravación de las conductas penalizadas; todo ello de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe sobre los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos ocasione al conglomerado social.

La legislación colombiana desarrolla la fase etaria que comprende al menor de edad, tanto en el Código Civil como en el Código de la Infancia y la Adolescencia, reconociendo como menor a

quienes aún no hayan alcanzado los 18 años de edad; en tanto que la Jurisprudencia Constitucional ha señalado que la protección especial de los derechos del menor tiene fundamento principalmente en tres razones: i) la situación de fragilidad en que se encuentran frente al mundo, atendiendo su desarrollo personal; ii) constituye una forma de promover una sociedad democrática cuyos asociados conozcan y compartan los principios de libertad, igualdad, tolerancia y solidaridad; y ii) la pretensión de corrección del déficit de representación política que soportan los menores, al no poder participar directamente en el debate democrático.<sup>6</sup>

La protección constitucional especial y prevalente de los derechos del menor, que también encuentra reconocimiento en los Convenios Internacionales de Derechos Humanos a través del principio del interés superior del menor, contemplado en diversos instrumentos internacionales, convoca la disposición de un trato preferente y de protección especial que garantice las plenitud de sus derechos, que comprende la protección contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral y económica y trabajos riesgosos, que amenacen su desarrollo armónico e integral

---

<sup>6</sup> Ley 1098 código de la infancia y adolescencia. Art 1. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.

### **3.1.1 Omisión de denuncia de particular**

El artículo 18 de la Ley 1121 de 2006, que modifica el artículo 441 del Código Penal, contempla el tipo penal de omisión de denuncia de particular, que tiene por objeto establecer una medida de protección a favor del menor de 12 años, al sancionar con prisión de 3 a 8 años, a quien teniendo conocimiento de la comisión de cualquiera de los delitos de explotación sexual, contempladas en el Capítulo IV del Título IV, omita sin justa causa informar de ello de manera inmediata a la autoridad, medida mediante la cual el legislador buscó cumplir a cabalidad los imperativos constitucionales e internacionales de derechos humanos que disponen una protección preferente de los menores, pero que para la Corte Constitucional constituye una protección limitada, carente de justificación, que priva de tal protección a los adolescentes (mayores de 12 y menores de 18 años), que también están cobijados por el concepto “menor de edad”, cuando constituyen la población más expuesta a los delitos que se identifican como conductas propias de explotación sexual.

Para la Corte Constitucional, en la sentencia C-853/09, sin duda la norma demandada, artículo 18 de la Ley 1121 de 2006, priva a un grupo significativo de menores de edad -adolescentes-, de una importante medida de protección penal que busca asegurar el goce efectivo de bienes tan preciados como la libertad, la integridad y la formación sexual, y por tanto no resulta razonable ni proporcionado el aparte acusado dado que se muestra como una medida contraria al, generar una grave desprotección para con los derechos de los adolescentes.

Por otra parte, la trata de personas es un delito atroz que afecta la dignidad humana en todas sus esferas, toda vez que con esta actividad se comercializa con seres humanos como si fueran bienes que circulan en el comercio, siendo una forma extrema de explotación, la cual infortunadamente

ha venido aumentando en proporciones alarmantes, hasta considerarse una de las conductas delictivas de mayor rentabilidad económica.

Para hacerle frente a este fenómeno, que impacta de manera directa a un número indeterminado de personas con consecuencias funestas, se ha diseñado un marco normativo a nivel internacional que busca que los Estados compaginen sus esfuerzos y adopten medidas normativas y políticas públicas coherentes y aplicables desde el punto de vista social y jurídico, como una forma válida de control formal y de lucha contra el delito de trata de personas.

Colombia no ha sido ajena ni a la problemática mencionada ni al marco normativo en referencia, ya que la conducta de trata de personas se presenta en sus diversas modalidades en distintos lugares del territorio nacional y/o del exterior, ocasionando detrimento en los derechos humanos de connacionales y extranjeros. Así mismo, el Estado ha adquirido una serie de obligaciones y compromisos internacionales con los Tratados que en materia de trata de personas ha ratificado a través de los años. Ante la necesidad de dar cumplimiento a lo acordado a nivel internacional, el país ha tenido importantes avances en materia legislativa, entre los que se encuentra la tipificación del delito y la adopción de disposiciones normativas como la Ley 985 de 2005, que regula el tema de manera específica.

Resulta necesario afirmar que la política criminal de un Estado social y democrático de derecho se debe sujetar a los estrictos lineamientos constitucionales. Parte de dicha política criminal radica en la tipificación como delitos de las conductas que, por su gravedad, atentan contra la paz y estabilidad sociales. Ahora bien, es claro que el ejercicio del ius puniendi debe sujetarse claramente a unos estrictos lineamientos constitucionales. Así las cosas, tal como lo ha afirmado la Corte Constitucional en relación con el tema:



(...) de acuerdo con la Carta Política, es al Congreso de la República a quien se le atribuye la competencia para diseñar la política criminal del Estado, correspondiéndole entonces definir cuáles conductas constituyen delitos, qué penas deben imponerse y cuál el procedimiento a seguir para aplicar la respectiva sanción.

La Corte Constitucional, ha destacado que es consustancial al Estado de derecho, el hecho de que las conductas constitutivas de delitos y sus respectivas sanciones, trascendentales en el ámbito del ejercicio de los derechos fundamentales, sean determinadas mediante ley, es decir, “sean fruto de un debate dinámico entre las distintas fuerzas políticas que se asientan en el parlamento pues sólo así se garantiza que el ejercicio del poder punitivo del Estado se ajuste a parámetros racionales y no se distorsione por intereses particulares o necesidades coyunturales” .

Sobre el particular, dijo esta Corporación en la Sentencia C-034 de 2005:

*“La Corte ha sido enfática en reconocer que para la definición de la política criminal del Estado y, en particular, en materia penal para la configuración de las conductas punibles, el órgano legislativo tiene una competencia amplia y exclusiva que encuentra claro respaldo en el principio democrático y en la soberanía popular (C.P., arts. 1º y 3º), razón por la cual, corresponde a las mayorías políticas, representadas en el Congreso, determinar, dentro de los marcos de la Constitución Política, la orientación del Estado en estas materias”.*

Considerando entonces que el régimen penal aplicable no aparece definido como tal en la Constitución, ese mismo ordenamiento Superior ha delegado en el legislador la facultad para regularlo, de acuerdo con las circunstancias políticas, sociales, económicas y de otro orden que en un momento histórico puedan incidir en la realidad que se pretenda controlar.

En ese contexto, la competencia para regular la política criminal del Estado, es amplia, e incluye la facultad del legislador para crear, modificar o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, y fijar la clase y magnitud de las penas de acuerdo con criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados. Igualmente, le permite consagrar los regímenes para el juzgamiento y tratamiento de los delitos y contravenciones, definiendo en ellos las reglas de procedimiento aplicables de acuerdo con las garantías del debido proceso.

Ahora bien, sin desconocer que el ámbito de configuración normativa en ese campo presente un importante margen de discrecionalidad, la Corte Constitucional, ha sido enfática en afirmar que el mismo no tiene un alcance absoluto.

A juicio de este Tribunal, la libertad para diseñar la Política Criminal del Estado y para tipificar conductas punibles e imponer penas, encuentra límites en la propia Constitución Política y, concretamente, en el sistema de valores, principios y derechos fundamentales consagrados en el mismo ordenamiento Superior.

Dichos límites, lo ha dicho la Corporación, resultan particularmente claros y relevantes, “por estar de por medio derechos fundamentales muy caros para la persona humana, como lo son la libertad personal y el debido proceso, así como valores sociales tan importantes como la represión del delito o la resocialización efectiva de sus autores”.

Adicionalmente, el máximo Tribunal de lo Constitucional es claro en afirmar que:

*(...) en el Estado Social de Derecho, donde la dignidad humana ocupa un lugar de privilegio en el orden jurídico, los valores, principios y derechos fundamentales se constituyen en límites sustantivos del poder punitivo del Estado –produciendo el efecto de racionalizar el ejercicio de tal potestad–, por lo que “Sólo la utilización*

*medida, justa y ponderada de la coerción estatal, destinada a proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y fines del ordenamiento”.*

Resulta claro que erigir en delito la trata de personas es coherente, proporcional y razonable con la política criminal del Estado, porque debe asegurarse que ninguna persona tome un dominio sobre otra aprovechándose de múltiples circunstancias que convierten a ésta última en un ser potencialmente vulnerable. Este argumento tiene un claro asidero en la Carta Política de 1991, de la cual, sólo a manera de ilustración, pondremos en evidencia los artículos más relevantes y que deben ser tenidos en cuenta al momento de interpretar los artículos 188 A y 188 B del Código Penal:

**Artículo 1º.** Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana.

**Artículo 11.** El derecho a la vida es inviolable (...). **Artículo 12.** Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. (...).

**Artículo 13.** Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

**Artículo 14.** Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

**Artículo 16.** Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.

**Artículo 17.** Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas.

**Artículo 44.** Son derechos fundamentales de los niños... Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

**Artículo 250.** ...En ejercicio de sus funciones, la Fiscalía General de la Nación deberá:

...6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.

El artículo 188 A del Código Punitivo, modificado por la Ley 985 de 2005, tipifica la trata de personas en estos términos:

“El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación.

El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal”.

A su turno, el artículo 188 B preceptúa las siguientes circunstancias de agravación punitiva:

“Las penas para los delitos descritos en el artículo 188 y 118-A, se aumentará de una tercera parte a la mitad, cuando:

1. Cuando se realice en persona que padezca inmadurez psicológica, trastorno mental, enajenación mental y trastorno psíquico, temporal o permanentemente o sea menor de 18 años.
2. Como consecuencia, la víctima resulte afectada en daño físico permanente y/o lesión psíquica, inmadurez mental, trastorno mental en forma temporal o permanente o daño en la salud de forma permanente.
3. El responsable sea cónyuge o compañero permanente o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.
4. El autor o partícipe sea servidor público.

**Parágrafo.** Cuando las conductas descritas en los artículos 188 y 188-A se realicen sobre menor de doce (12) años se aumentará en la mitad de la misma pena”.

Otro aspecto importante a resaltar es la incursión de los menores de edad a las filas de los grupos al margen de la ley, trátase de guerrilla, paramilitares o delincuencia común, lo cual puede suceder por diversos motivos, tales como el económico, el cultural, el social y en el peor de los casos cuando son reclutados en contra de su voluntad.

Al respecto hay dos situaciones que se deben distinguir en cuanto al reclutamiento de menores de edad: por un lado, puede ocurrir que la víctima en este caso sea compelida, obligada a enrolarse en las filas de una organización armada, y por otro lado, es factible que sea el mismo menor de edad que de manera voluntaria, es decir, por convicción propia decida hacerlo, aunque es irrelevante si es compelida por otra persona o motu proprio decida enrolarse en tal grupo armado,

en uno u otro caso es una situación que causa daños irreparables al menor víctima de esta situación, pues es separado del seno familiar, interrumpe sus estudios escolares, es abusado sexualmente, es violentado física y psicológicamente y su vida corre peligro permanentemente, entre otras cosas.

Reforzando el tema del reclutamiento de menores, es pertinente traer a colación lo expuesto en la doctrina respecto de la distinción entre los conceptos de combatientes menores de edad y el de los niños soldados. En este orden de ideas, se afirma al respecto: “En el primero se incluyen de manera exclusiva los menores que participan directamente en las hostilidades, y en el último se incluyen a todos los menores que de manera voluntaria o forzada sirven a una de las partes en conflicto en calidad de auxiliar, cocinero(a), informante, guía, cargador(a), esposa forzada, esclava forzada, etc”.

Ahora bien, una vez establecida la existencia de un fin de explotación en este punible y en el cual se clasifica al menor de edad para unos determinados objetivos, es oportuno preguntarse si desde el punto de vista jurídico dogmático es posible concursar o no los delitos consagrados en los artículos 188 A y 162 del Código Penal, que taxativamente dicen: TRATA DE PERSONAS: “El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación,” etc. y : RECLUTAMIENTO ILICITO: “ El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute menores de 18 años, o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas “.,respectivamente.

La respuesta es que hay un concurso aparente que debe resolverse por la vía de subsunción a favor del artículo 162, que es el llamado a aplicarse por tener, además, una riqueza mucho mayor, habida cuenta de las circunstancias particulares que lo rodean (existencia de un conflicto armado internacional o interno). En efecto, cuando se constate el reclutamiento doloso de menores de 18

años o los obliguen a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, se tipificará penalmente esta conducta.

De otra parte, en razón a la disposición contendida en el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, relacionada con la obligación de tomar medidas legislativas, administrativas o de otra índole, es necesario realizar un análisis de derecho comparado en el que se brinde una perspectiva actual de la normativa internacional en materia de leyes migratorias existentes en países con los que Colombia ha mantenido niveles importantes de migración de víctimas de trata, con la finalidad de determinar si conjuntamente con la tipificación interna del delito existe una correspondiente armonización con la legislación interna de migración. Además, se hará una breve observación en cuanto a las ratificaciones que ha hecho cada país de los instrumentos internacionales sobre el tema. El análisis se circunscribe a Panamá, Trinidad y Tobago, Ecuador y Colombia.

**Tabla 2.**

Derecho comparado con relación a los países de Panamá, Trinidad y Tobago, Ecuador y Colombia.

<b>País</b>	<b>Leyes sobre trata</b>	<b>Leyes migratorias</b>	<b>Instrumentos internacionales ratificados</b>
<b>PANAMÁ</b>	Ley N° 16 de 2004, Contribución a la prevención y la eliminación de la explotación sexual comercial de personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana.	Ley N° 3 de 2008, Crea el Servicio Nacional de Migración, la Carrera Migratoria y dicta otras disposiciones.	
<b>TRINIDAD Y TOBAGO</b>	No dispone de un marco legal específico que sancione la explotación sexual comercial y la trata de personas. Ley de Delito Sexual de 1986.	Immigration Act de julio de 1976.	



---

<b>ECUADOR</b>	<p>Ley N° 1.823 de 2006. Ley N° 1971, de 1.981 de 2004</p> <p>Ley N° 1899 de 1971, Ley de Migración.</p> <p>Creación del Plan Nacional por parte de la Comisión Interinstitucional.</p> <p>Ley Reformatoria al Código Penal que Tipifica los Delitos de Explotación Sexual de los Menores de Edad (2005).</p>
<b>COLOMBIA</b>	<p>Ley 985 de 2005, Ley 1203 de 2008, por medio de la “Estatuto cual se adoptan Migratorio medidas contra la Permanente, entre trata de personas Colombia y y normas para la Ecuador, firmado el atención y 24 de agosto de protección de las 2000”. Decreto víctimas de la 4000 de 2004, misma. Ley 800 visas: nuevas de 2003, por normas sobre medio de la cual expedición de se aprueban la visas, control de Convención de extranjeros y las Naciones migración.</p>

---

---

Unidas contra la  
Delincuencia  
Organizada  
Transnacional y  
el Protocolo para  
Prevenir,  
Reprimir y  
Sancionar la  
Trata de  
Personas,  
Especialmente  
Mujeres y Niños,  
que complementa  
la Convención de  
las Naciones  
Unidas contra la  
Delincuencia  
Organizada  
Transnacional,  
adoptadas por la  
Asamblea  
General de las  
Naciones Unidas.  
Ley 747 de 2002,  
por medio de la  
cual se hacen  
unas reformas y  
adiciones al  
Código Penal  
(Ley 599 de  
2000)

---

*Nota. Elaboración propia*

En materia de trata de personas, Colombia se ha destacado por su desarrollo normativo. Desde el Decreto 100 de 1980, por medio del cual se expide el Código Penal, y se introduce un concepto de trata pero asociado únicamente a la prostitución. Más adelante viene la Ley 747 de 2002, por medio de la cual se hacen unas reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de 2000), en la que se incorpora un nuevo y más completo tipo penal de trata de personas.

Así mismo, en el año 2005 nace la Ley 985, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma. Es una ley muy completa desde la perspectiva de los DDHH, ya que se amplía y complementa el tipo penal de trata de personas, en concordancia con el Protocolo de Palermo, al establecerse lo siguiente:

**“Artículo 188A.** Trata de personas. El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación.

El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal”.

Como se puede observar, es un concepto más preciso y amplio en el que se aumenta considerablemente la pena, se determina lo que debe entenderse por explotación, se nombran las modalidades de trata, pero se deja abierto el concepto a cualquier forma de explotación, y se enfatiza el hecho de que el consentimiento de la víctima no es un elemento excluyente de responsabilidad penal.

Por otro lado, por mandato del artículo 4º de la referida ley, el Gobierno adoptó la Estrategia Nacional Integral de Lucha contra la Trata 2007-2012 mediante Decreto 4786 de 2008.<sup>7</sup>

En materia de prevención, específicamente, la Ley 985 de 2005 prevé la obligación del Estado y sus instituciones de tomar medidas y adelantar campañas y programas de prevención, realizar determinadas acciones como actividades de capacitación de los servidores públicos, implementar programas de sensibilización pública y asesorar a las autoridades departamentales y municipales. También en esta estrategia de prevención debe involucrar a la academia, según Álvarez, Sandoval, Saker & Moreno (2017), es pertinente el desarrollo de las competencias ciudadanas de los estudiantes universitarios, cuyo abordaje debe transversalizar los saberes disciplinares desde una perspectiva de la integración de los saberes disciplinares.

En este punto se presenta un motivo de preocupación, y es que la prestación de la asistencia mediata está sujeta a que la víctima haya denunciado el delito ante las autoridades, lo que implica confirmar su calidad de tal y colaborar con la justicia. Es un tema preocupante, toda vez que la realidad ha demostrado que en muchos casos la víctima no denuncia por temor, falta de garantías y múltiples factores. No obstante, lo anterior, la práctica desplegada por los funcionarios en materia de protección a las víctimas ha sido bastante satisfactoria.

---

<sup>7</sup>Decreto por el cual se adopta la Estrategia Nacional Integral contra la trata de personas, Que la Ley [985](#) de 2005, por la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma, en su artículo 4º señala que el Gobierno Nacional adoptará, mediante decreto, la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas

Es destacable el trabajo realizado por las autoridades colombianas con roles o funciones en materia de trata de personas, conjuntamente con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ya que han venido adelantando esfuerzos con el ánimo de lograr la expedición de un decreto único que reglamente el tema de asistencia a las víctimas. Solo en Colombia es posible a través de la Ley 1448 de 2011, junio 10.

En materia de judicialización y promoción, la ley establece medidas para el fortalecimiento de la investigación judicial y la acción policiva como capacitaciones especializadas por parte de la Fiscalía General de la Nación, y la Policía Nacional, para propender por una eficaz cooperación internacional en los ámbitos judicial y de policía, además del compromiso del gobierno de fortalecer la cooperación internacional identificando los países involucrados en actividades relacionadas con la trata de colombianos o para los que Colombia representa un lugar de tránsito o destino de actividades de trata transnacional, para darles prioridad en el tema de cooperación.

La ley también incluye disposiciones sobre el objeto, funciones, integración y funcionamiento del Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas (antes llamado Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, creado por el Decreto 1974 de 1996) y el Sistema Nacional de Información sobre la Trata de Personas como instrumento base para la formulación de políticas, planes estratégicos y programas. Es una ley muy positiva desde la perspectiva de los derechos humanos y el trato de las víctimas, pero tiene una falencia respecto al tema de la lucha contra las redes de tratantes, al no incorporar disposiciones técnicas o específicas en el tratamiento de temas como por ejemplo el manejo de activos producto del delito, aunque es de resaltar que los artículos 20 y 22 abren la posibilidad de reglamentación en este aspecto.

En lo que tiene que ver con la normativa sobre migración, Colombia cuenta con el Decreto 4000 de 2004, por el cual se dictan disposiciones sobre la expedición de visas, control de extranjeros y se dictan otras disposiciones en materia de migración. En éste Decreto es importante resaltar el artículo 73.10, que dispone las situaciones en las que un extranjero no podría ingresar al territorio y menciona específicamente la trata de personas, así:

*“Artículo 73. Ningún extranjero podrá ingresar al territorio nacional si se encuentra comprendido dentro de alguna de las siguientes situaciones:*

*(...) 10. Registrar antecedentes y/o anotaciones por tráfico de migrantes, trata de personas o tráfico de órganos, pornografía infantil y/o delitos comunes. (...)*

A su vez, Colombia cuenta con la Ley 1203 de 2008, por medio de la cual se aprueba el “Estatuto Migratorio Permanente” entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá el 24 de agosto de 2000. En esta Ley se encuentra una serie de disposiciones que facilitan el ingreso de ecuatorianos y colombianos a los respectivos países, incluyendo beneficios que deben ser reconocidos en materia de seguridad social, medidas de protección y asistencia que garantizan a los extranjeros los mismos derechos, garantías y obligaciones de los nacionales, prestar facilidades para que el migrante irregular legalice su situación, etc. Es un instrumento positivo en el tema de cooperación bilateral con Ecuador, sin embargo, no tiene un contenido que se refiera al tema de trata de personas o al manejo de víctimas.

**Tabla 3.**

Resoluciones de Organismos Internacionales en materia de Trata de Personas

<b>Resoluciones de Organismos Internacionales en materia de Trata de Personas</b>			
<b>Resolución</b>	<b>Prevención y Promoción</b>	<b>Protección</b>	<b>Judicialización</b>
<b>Asamblea General Resolución 59/166 de 2005 Trata de mujeres y niña</b>	Insta a los gobiernos interesados a que, en cooperación con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, apoyen la ejecución de programas para incrementar la acción preventiva, en particular actividades educativas y campañas para promover la concienciación pública sobre el problema en los planos nacional y de base, y a que asignen recursos a esos programas.	Teniendo presente que todos los Estados están obligados a actuar con la debida diligencia para prevenir e investigar la trata de personas y castigar a los responsables y ofrecer protección a las víctimas, y que con el incumplimiento de esa obligación se viola y menoscaba o anula el disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales.	Alienta a los gobiernos y a los órganos competentes de las Naciones Unidas a que, dentro de los límites de los recursos existentes, adopten medidas apropiadas para aumentar la concienciación pública sobre el problema de la trata de personas, particularmente mujeres y niñas, incluso abordando el problema desde el punto de vista de la demanda y dando publicidad a las leyes, los reglamentos y las sanciones
	Invita además a los gobiernos a que alienten a los proveedores de servicios de la Internet a adoptar o reforzar medidas de	Invita a los gobiernos a que adopten medidas para asegurar que en	

---

autorregulación para los procedimientos relacionados con promover una de justicia penal y esta cuestión utilización responsable los programas de de la Internet con miras protección de a eliminar la trata de testigos se tenga mujeres y niños, en muy en cuenta la particular niñas. situación particular de las mujeres y

Subraya la necesidad de niñas que son reunir datos víctimas de la trata, sistemáticamente y así como para preparar estudios asegurar que las completos a niveles víctimas puedan nacional e internacional presentar denuncias y elaborar metodologías a la policía o a otras comunes indicadores autoridades, según definidos proceda, y internacionalmente para comparecer cuando obtener cifras así lo requiera el pertinentes y sistema de justicia comparables, y alienta a penal, y a que velen los gobiernos a que porque, en esos mejoren el intercambio momentos, las de información y la víctimas tengan capacidad de reunión de acceso a la datos como forma de protección y la promover la asistencia social, cooperación para hacer médica, financiera y frente al problema de la jurídica que trata. necesiten.

---



---

Mejorar el intercambio de información y la capacidad de reunión de datos como forma de promover la cooperación para hacer frente al problema de la trata, en particular mediante la reunión sistemática de datos desglosados por sexo y por edad.

Pide a la Oficina del Alto Comisionado que redoble sus esfuerzos en el marco del Grupo Interinstitucional de coordinación contra la trata de personas para promover e integrar un enfoque basado en los derechos humanos en las actividades para combatir la trata de personas.

Mejorar el intercambio de información y la capacidad de reunión de datos como forma de promover la Reconociendo la preocupación expresada por el Comité de Derechos Humanos, el Comité Tipificar como delito la trata de personas en todas sus formas y condenar y castigar a

---

<b>Asamblea General Resolución A/ HRC/11/L.6</b>	<p>cooperación para hacer frente al problema de la trata, en particular mediante la reunión sistemática de datos desglosados por sexo y por edad.</p> <p>Pide a la Oficina del Alto Comisionado que redoble sus esfuerzos en el marco del Grupo Interinstitucional de coordinación contra la trata de personas para promover e integrar un enfoque basado en los derechos humanos en las actividades para combatir la trata de personas.</p> <p>Proporcionar a las fuerzas del orden, los funcionarios de inmigración, los funcionarios de justicia penal y otros funcionarios competentes, incluido el personal que participa</p>	<p>para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura por la persistencia de la trata y la vulnerabilidad de las víctimas a las violaciones de los derechos humanos.</p> <p>Tomar todas las medidas apropiadas para que las víctimas de la trata no resulten penalizadas a causa de su situación y no vuelvan a convertirse en víctimas como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales, teniendo presente que son víctimas de la explotación y</p>	<p>los traficantes, facilitadores e intermediarios, en particular mediante la imposición, cuando proceda, de sanciones a las personas jurídicas involucradas en el proceso de trata, sin que la participación de las víctimas o la presentación de acusaciones por parte de éstas sea una condición previa para el enjuiciamiento de los traficantes. Reconociendo que las políticas y los programas de prevención, rehabilitación, repatriación y reintegración deben elaborarse mediante un enfoque integral y multidisciplinario que tenga en cuenta el género y la edad,</p>
--	--	--	--

---

en operaciones de alentar a los atendiendo a la mantenimiento de la gobiernos a que seguridad de las paz, formación en la proporcionen a las víctimas y prevención de la trata de víctimas de la trata respetando el pleno personas y las formas de acceso a apoyo y ejercicio de sus responder a ella de asistencia derechos humanos, y forma eficaz, entre otras especializados, con la participación cosas la identificación independientemente de todos los de las víctimas de su situación de interesados de los respetando plenamente inmigración. países de origen, sus derechos humanos. tránsito y destino.

El uso de las nuevas tecnologías de la información, en particular Internet, para la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, así como la trata de mujeres con fines matrimoniales y de turismo sexual, la utilización de niños en la pornografía, la pedofilia y cualquier otra forma de explotación sexual de niños.

Adoptar o reforzar las medidas legislativas o de otra índole para

---

---

desalentar la demanda que promueve todas las formas de explotación de personas y que da lugar a la trata de personas, incluida la demanda creada por el turismo sexual, en particular de niños, y el trabajo forzoso y, a ese respecto, mejorar las medidas preventivas, especialmente de carácter legislativo, para disuadir a los posibles explotadores de víctimas de la trata y velar porque los infractores rindan cuentas de sus actos. Contribuir a la asignación de los recursos necesarios, según corresponda, en cooperación con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, para potenciar la acción preventiva, en particular para educar a las mujeres y los hombres,

---

---

así como a las niñas y los  
niños.

---

*Nota: Elaboración propia*

Los instrumentos en comento reiteran la necesidad de penalizar, además de los actores principales, a las personas que tengan cualquier tipo de participación o complicidad, incluso, debería contemplarse la tentativa del delito.

Así, la cooperación internacional entre los Estados es de gran relevancia para tomar medidas en materia de extradición que faciliten su desarrollo, medidas de intercambio de información y en general de asistencia judicial recíproca. Llama la atención que no se encuentran acuerdos bilaterales que se refieran específicamente al tema de trata de personas; si bien Colombia cuenta con diversos acuerdos bilaterales en materia de asistencia penal y judicial y en materia de extradición, es un elemento necesario que debe tenerse presente.

#### **Tabla 4.**

Internacionales sobre trata de personas

<b>INSTRUMENTO INTERNACIONAL</b>	<b>RATIFICACIÓN</b>	<b>JUDICIALIZACIÓN</b>
Organización Internacional del Trabajo. Convenio N° 29 relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio (1930)	Entró en vigor el 1° de mayo de 1932. Colombia lo ratificó el 4 de marzo de 1979.	Enfatiza en la obligación de los miembros de la OIT que ratifiquen el mismo de suprimir el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas (artículo 1, 4.2). En su artículo 25, particularmente, dice que el hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio debe ser objeto de sanciones penales y que los Estados tienen la obligación de cerciorarse de que las sanciones impuestas por ley sean

---

---

		realmente eficaces y se apliquen estrictamente.
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1949)	Entró en vigor el 25 de julio de 1951. Colombia no lo ha ratificado.	Recalca el compromiso de los Estados de castigar a toda persona que concertare y/o explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma, al que mantiene o administra una casa de prostitución, al que arriende o tome en arriendo un edificio o local para explotación, las personas involucradas directa o indirectamente, etc. (artículos 1, 2, 3, 4).
Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud (1956)	Entró en vigor el 30 de abril de 1957. Colombia no la ha ratificado.	Habla de la adopción por parte de los Estados de las medidas legislativas necesarias para lograr la completa abolición y abandono de la esclavitud y una serie de prácticas análogas que relaciona en su articulado como la servidumbre, el matrimonio servil y la explotación laboral de menores (artículo 1). A su vez, determina que la trata de esclavos debe ser un delito en los Estados y que las personas que se declaren culpables deben ser castigadas con penas muy severas (artículo 3).
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)	Entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Colombia lo ratificó el 29 de octubre de 1969.	Dice que los Estados se comprometen a garantizar que la persona cuyos derechos hayan sido violados, pueda interponer un recurso efectivo, aun cuando la violación haya sido cometida por personas en

---

---

		ejercicio de sus funciones oficiales (artículo 2.3).
Organización Internacional del Trabajo. Convenio N° 143 sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (1975)	Entró en vigor el 9 de diciembre de 1978. Colombia no lo ha ratificado.	Los Estados deben tomar medidas para que los traficantes de mano de obra puedan ser objeto de una acción en justicia, sea cual sea el país que sirve de base a sus operaciones (artículo 5), deben tomar disposiciones en la legislación para llegar a investigar eficazmente el empleo ilegal de trabajadores migrantes y demás (artículo 6).
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979)	Entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. Colombia lo ratificó el 19 de enero de 1982.	El artículo 6 es muy importante porque establece específicamente que los Estados tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990)	Entró en vigor el 1° de julio de 2003. Colombia se adhirió el 24 de mayo de 1995.	Los Estados deben tomar medidas para detectar y eliminar los movimientos ilegales o clandestinos de trabajadores migratorios y sus familiares, y para imponer sanciones efectivas a las personas, grupos o entidades que organicen o dirijan esos movimientos, así como a las personas, grupos o entidades que hagan uso de la violencia o de amenazas o intimidación contra los

---

---

		trabajadores migratorios o sus familiares en situación irregular (artículo 65).
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (conocida como la Convención de Belém do Pará) (1994)	Entró en vigencia el 16 de diciembre de 1996, Fue ratificada por Colombia en 1995.	Reitera la obligación de los Estados de condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar políticas y medidas dirigidas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. En materia de judicialización, medidas como establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces (artículo 7).
Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (1994)	Entró en vigor el 15 de agosto de 1997. Colombia lo ratificó el 12 de junio de 2000.	El artículo 7 habla del compromiso de los Estados de adoptar medidas eficaces para prevenir y sancionar severamente el tráfico internacional de menores.
Organización Internacional del Trabajo. Convenio N° 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la	Entró en vigor el 19 de noviembre de 2000. Colombia lo ratificó el 28 de enero de 2005	Ratifica el deber de los Estados de adoptar medidas inmediatas y eficaces, como elaborar y poner en práctica programas de acción para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil como medida prioritaria y con carácter de urgencia

---



---

acción inmediata para su eliminación (1999)	(artículo 1, 6); además, el deber de establecer y aplicar las sanciones penales o de otra índole que sean necesarias (artículo 7).
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000)	<p>Entró en vigor el 18 de enero de 2002. Colombia lo ratificó el 11 de noviembre de 2003.</p> <p>Los Estados deben tomar medidas para incluir en su legislación penal actos o actividades como ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de explotación sexual, la transferencia con fines de lucro de órganos, el trabajo forzoso de niños, ofrecer, obtener, facilitar o proporcionar un niño con fines de prostitución, entre otros. Se debe aplicar lo anterior también en los casos de tentativa, complicidad o participación (artículo 3). Cabe resaltar que el artículo se refiere a este tipo de conductas tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual o colectivamente</p> <p>Deben castigar estos delitos con penas adecuadas a su gravedad, además deben adoptar disposiciones que permitan hacer efectiva la responsabilidad de personas jurídicas, así como para hacer efectiva su jurisdicción respecto de determinados casos como cuando la víctima sea nacional de ese Estado o cuando el presunto delincuente sea hallado en su</p>

---

---

territorio y no sea extraditado (artículo 4).

Los Estados deben considerar incluidos entre los delitos que dan lugar a la extradición los delitos contenidos en el Protocolo. Los Estados que no concedan la extradición por alguno de esos delitos deben adoptar medidas que correspondan para someter el caso a sus autoridades competentes para enjuiciamiento (artículo 5). Además, los Estados deben prestarse toda la asistencia posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición, particularmente para la obtención de todas las pruebas necesarias para esos procedimientos que obren en su poder (artículo 6). Además, deben adoptar medidas para incautar y confiscar bienes utilizados para la comisión del delito, las utilidades obtenidas de esos delitos, medidas para cerrar locales utilizados para cometer el delito, etc.

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000)

Entró en vigor el 29 de septiembre de 2003. Colombia la ratificó el 4 de agosto de 2004.

El artículo 5 prevé la obligación de los Estados de tomar las medidas necesarias para tipificar los diferentes delitos y penalizar la participación en un grupo delictivo organizado, el manejo de bienes producto del delito, medidas para combatir el blanqueo de dinero, la corrupción, etc.

---

---

El artículo 10 es particularmente importante porque dice que los Estados deben adoptar medidas para establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado.

El artículo 11 contiene disposiciones sobre el proceso, fallo y sanciones de los delitos. Entre sus medidas se refiere a la necesidad de los Estados de penalizar los delitos con sanciones que tengan en cuenta su gravedad, que el enjuiciamiento tenga máxima eficacia, velar porque los tribunales u otras autoridades competentes tengan presente la naturaleza grave de esos delitos, etc.

El artículo 13 establece la necesidad de que haya cooperación internacional para fines de decomiso del producto del delito, sea bienes u otros instrumentos, y ante solicitud de Estado parte, dar consideración prioritaria a la devolución del producto del delito o de los bienes decomisados al Estado parte requirente a fin de que éste pueda indemnizar a las víctimas del delito o devolver ese producto del delito o esos bienes a sus propietarios legítimos (artículo 14.2).

---

---

El artículo 16 contiene disposiciones importantes en materia de extradición, como el requisito de que el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado parte requirente y del Estado parte Requerido. Nota: En este punto es necesario hacer una observación, y es que en muchos países como Panamá y Trinidad y Tobago no hay una tipificación exacta del delito de trata de personas, lo que hace que en un eventual caso donde se requiera la extradición sea difícil que sea admitida por el requisito referido anteriormente. Ante lo anterior, es urgente que los Estados tomen las medidas necesarias para tipificar claramente el delito de trata en concordancia con el Protocolo de Palermo.

Los Estados deben procurar agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios; también deben procurar celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.

El artículo 18, por su parte, habla sobre la asistencia judicial recíproca y establece en su numeral 1 que los Estados parte se

---

---

deben prestar la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales. Según el articulado, la mencionada asistencia judicial puede solicitarse para fines como recibir testimonios o tomar declaración de personas, presentar documentos judiciales, efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos, examinar objetos y lugares, facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos, entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios, facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado requirente, entre otros.

El artículo 26 habla sobre medidas que deben tomar los Estados para intensificar la cooperación con las autoridades de personas que participen o hayan participado en grupos delictivos organizados.

El artículo 27 habla de la cooperación en materia de cumplimiento de la ley, y recalca el deber de los Estados de adoptar

---

---

		medidas eficaces para intercambiar información con otros Estados sobre los medios y métodos concretos empleados por los grupos delictivos organizados, en lo posible, sobre las rutas y los medios de transporte y el uso de identidades falsas, documentos alterados o falsificados u otros medios de encubrir sus actividades.
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente de Mujeres y Niños (2000)	Entró en vigor el 25 de diciembre de 2003. Colombia lo ratificó el 4 de agosto de 2004.	En el artículo 3 se da una definición clara y muy completa sobre lo que debe entenderse por trata de personas. Los Estados deben adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar el delito de trata, la tentativa de comisión del delito, la participación como cómplice y la organización o dirección de otras personas para la comisión del delito (artículo 5).

---

*Nota: Elaboración propia*

Al respecto, la Ley 679 de 2001 constituye el primer instrumento legal específicamente dirigido a prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores de 18 años de edad, mediante la definición de normas penales y medidas administrativas y policivas que asignan responsabilidades a diversas autoridades públicas e instituciones privadas.

Dicha Ley creó una comisión de expertos en redes globales de información y telecomunicaciones para elaborar un catálogo de actos abusivos en el uso de esas redes, con base en el cual el gobierno nacional adoptó medidas administrativas y técnicas destinadas a prevenir el acceso de menores de edad a información pornográfica e impedir el aprovechamiento de redes

globales con fines de explotación sexual y comercial de niños, niñas, y adolescentes,(ESCNNA) mediante el Decreto 1524 del 24 de julio de 2002, que reglamenta el artículo 5° de la Ley del Ministerio de Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. El Decreto estableció una serie de obligaciones que deben ser cumplidas por los proveedores (ISP) o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información.

Así mismo, la Ley dispuso obligaciones de promoción y sensibilización pública sobre los riesgos y perjuicios de la prostitución, la pornografía y el turismo sexual con menores de edad a las entidades públicas, y confió a la Procuraduría General de la Nación el seguimiento y control respectivo. Igualmente, introdujo disposiciones de cooperación internacional para prevenir la ESCNNA; estableció la adopción de códigos de conducta para los prestador prestadores de servicios de la industria turística para prevenir la explotación y violencia sexual originada por turistas nacionales y extranjeros y fijó infracciones y sanciones administrativas para los prestadores de servicios turísticos que promuevan y faciliten “servicios sexuales” con menores de edad, a cargo del Ministerio de Desarrollo (Comercio, Industria y Turismo).

En relación con la apropiación de recursos para la financiación de planes y programas de prevención y lucha contra la ESCNNA, la Ley creó el impuesto a videos para adultos y el impuesto de salida del territorio nacional, creó el Fondo contra la explotación sexual de menores y adicionó el objeto del Fondo de Promoción Turística para que financie la ejecución de políticas de prevención para erradicar el turismo sexual con menores de edad.

Finalmente, la Ley asignó a la Policía Nacional funciones de vigilancia y control de establecimientos hoteleros u otros donde se tenga indicio de explotación sexual de menores de edad, y de inspección de casas de lenocinio para prevenir la explotación sexual y la pornografía

con menores de edad y estableció el cierre temporal o definitivo de los establecimientos que permitan actos sexuales o pornográficos en que participen menores de edad.

### **Alcance de la aplicación de la Ley 679 de 2001**

No obstante los avances normativos alcanzados, tales como la adopción del Código de Conducta para el manejo de redes globales por parte de Colombia Telecomunicaciones (Antigua Telecom), la aprobación de los criterios de clasificación de páginas de Internet con contenidos de pornografía infantil –presentados públicamente en 2004, y la constitución del Comité para el seguimiento de la Ley 679, los avances en materia de prevención de la pornografía con menores de edad no se reflejan de la misma manera en el cumplimiento de otros aspectos de la ley, y las medidas tomadas no son todavía suficientes.

La Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer, ha hecho un llamado a las autoridades de policía y fiscalía para incrementar la vigilancia de establecimientos como bares, discotecas, hoteles y calles, y realizar las investigaciones pertinentes para que la ESCNNA no quede impune, requiriendo fortalecer los controles de inmigración de turistas y de emigración de NNA fuera del país, reiterando la necesidad de realizar campañas de prevención para que NNA y adultos conozcan los riesgos y sepan cómo actuar para evitar este flagelo y ante quién acudir cuando se presenten los casos, e instando a los medios de comunicación a cumplir su función social de adelantar campañas masivas de información sobre las formas de detección, protección y atención a las víctimas y sanción a los responsables, ante la indiferencia y la estigmatización que favorece la utilización de niños y niñas tantas veces mencionados.

De igual manera, la Ley 985 de 2005 sobre la trata de personas en su artículo 3°, establece una estrategia nacional, fija medidas de prevención de la trata de personas, de protección y asistencia a las víctimas y de fortalecimiento de la investigación judicial, la acción policial y de la



cooperación internacional para combatir esa práctica delictiva, así mismo reglamenta el Comité interinstitucional para la lucha contra la trata de personas, y crea el Sistema Nacional de Información para la recolección, procesamiento y análisis de la información estadística y académica, relativa a las causas, características y dimensiones de la trata interna y externa en Colombia, que servirá de base para la formulación de políticas, planes estratégicos y programas, y para la medición del cumplimiento de los objetivos trazados en la estrategia nacional.

En relación con los menores de edad, víctimas de trata de personas, el artículo 9° señala al ICBF como la entidad encargada de suministrar asistencia, para lo cual deberá tener en cuenta su vulnerabilidad, sus derechos y sus necesidades especiales, y fija que a las víctimas se les deberá garantizar, como mínimo, asistencia médica y psicológica por personas especializadas, alojamiento temporal en lugares adecuados, reincorporación al sistema educativo, asesoramiento jurídico durante todo el proceso legal al (la) niño(a) y a sus familiares, y reintegración del (la) niño(a) a su entorno familiar, previa verificación de que los tratantes no pertenezcan a su núcleo familiar y que se garanticen las condiciones de seguridad y atención.

Por otro lado, en el Código Penal Colombiano, art. 229 habla sobre el maltrato intrafamiliar, de la siguiente manera:

“El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor de sesenta y cinco (65) años o que se encuentre en

incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión.

**Parágrafo.** A la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio o residencia, y realice alguna de las conductas descritas en el presente artículo”.

**La violencia intrafamiliar se clasifica en: física, psicológica y sexual:**

**La violencia física:** hace referencia a la coacción que hace una persona sobre otra para viciar su voluntad y obligarla a ejecutar un acto determinado. Dicha coacción puede provocar incapacidad laboral transitoria o permanente y a su vez puede dejar secuelas psíquicas. (Código Penal Colombiano, artículo 230)

**La violencia psicológica:** Constituye las alteraciones de las funciones mentales que se derivan del actuar de un tercero Art.115 del Código Penal. Este tipo de violencia actúa con agresiones verbales y con actuaciones crueles.

**La violencia sexual:** Constituye tanto la violencia física como la violencia psicológica. Los ejemplos claros en los cuales se evidencia una violencia sexual se pueden encontrar en el título IV “Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales” Capítulo primero de la violación. Los artículos en su mayoría hablan sobre un uso de la violencia por parte del sujeto activo para alcanzar la satisfacción de sus deseos erótico-sexuales y como consecuencia de lo obtenido provocarle daños “irreparables” en detrimento a la psiquis de la víctima, creando posiblemente un estado de inferioridad mental.

Al respecto la ley 1236 de 2008, por medio del cual se modifican algunos artículos del Código Penal relativos a delitos de abuso sexual, señala:

Art 8, estable que el artículo 213 del Código Penal (Ley 599 de 2000) quedará así:

*“Inducción a la Prostitución: El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de diez (10) a veintidós (22) años y multa de sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.*

Art. 9 señala que el artículo 214 del Código Penal (Ley 599 de 2000) quedará así:

*“Constreñimiento a la Prostitución: “El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, constriña a cualquier persona al comercio carnal o a la prostitución, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años y multa de sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.*

El Art 10 establece que el artículo 216 del Código Penal (Ley 599 de 2000) quedará así:

“Circunstancias de Agravación Punitiva. Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores, se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando la conducta:

1. Se realizare en persona menor de catorce (14) años.
2. Se realizare con el fin de llevar la víctima al extranjero.
3. El responsable sea integrante de la familia de la víctima.
4. Cuando la víctima fuere una persona de la tercera edad o, disminuido físico, sensorial, o psíquico”

Art 11. El artículo 217 del Código Penal (Ley 599 de 2000) quedará así:

Estímulo a la Prostitución de Menores:” El que destine, arriende, mantenga, administre o financie casa o establecimiento para la práctica de actos sexuales en que participen menores de edad, incurrirá en prisión de diez (10) a catorce (14) años y multa de sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima.

Art 12. El artículo 218 del Código Penal (Ley 599 de 2000) quedará así:

Pornografía con menores: “El que fotografíe, filme, venda, compre, exhiba o de cualquier manera comercialice material pornográfico en el que participen menores de edad, incurrirá en prisión de diez (10) a catorce (14) años y multa de ciento treinta y tres (133) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima. Para efectos de determinar los miembros o integrantes de la familia habrá de aplicarse lo dispuesto por el artículo 35 y siguientes del Código Civil relacionados con el parentesco y los diferentes grados de consanguinidad, afinidad y civil.

Art 13. El artículo 219-A del Código Penal (Ley 599 de 2000) quedará así:

Utilización o Facilitación de Medios de Comunicación para Ofrecer Servicios Sexuales de Menores: “El que utilice o facilite el correo tradicional, las redes globales de información, o cualquier otro medio de comunicación para obtener contacto sexual con menores de dieciocho (18) años, o para ofrecer servicios sexuales con éstos, incurrirá en pena de prisión de diez (10) a catorce (14) años, y multa de sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las penas señaladas en el inciso anterior se aumentarán hasta en la mitad (1/2) cuando las conductas se realizaren con menores de catorce (14) años.”

En este mismo sentido, a través de una sentencia de la Corte Constitucional se establecen las disposiciones y el procedimiento a cumplirse por parte del legislador en materia punitiva sobre la prostitución infantil.

**Sentencia 853- 09, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio**, en la cual se señala que el tipo penal acusado sanciona penalmente al particular que omita sin justa causa informar inmediatamente a la autoridad sobre la comisión de cualquiera de las conductas de proxenetismo, en las que el sujeto pasivo sea un menor de 12 años y de las cuales tuviere conocimiento. Encuentra así evidente que, si la víctima ha cumplido 12 años, pero aún no ha llegado a los 18, ya no es objeto de esa protección penal especial.

Estima que es al legislador al que corresponde establecer la política criminal del Estado; sin embargo, considera que dicha potestad no es absoluta por cuanto se halla limitada por los valores constitucionales, los principios fundamentales y los derechos fundamentales, particularmente por los principios de racionalidad y proporcionalidad.

Además de los deberes que se imponen a todos los residentes del país, como el obrar conforme al principio de solidaridad social y colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, expone que la Constitución establece la protección prevalente de los derechos del niño, como el garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Sostiene que constituye un deber del Estado el protegerlos contra toda forma de violencia, abuso o explotación sexual (art. 44 superior), lo cual se extiende a los adolescentes (art. 45 superior), citando también como respaldo de su afirmación la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 1º, 3º, 19, 34 y 36).

Luego, con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, se introduce un cambio normativo favorable en la concepción que se tenía sobre los derechos del menor, porque de ser sujetos catalogados como incapaces, bajo garantías restringidas y fuertes limitaciones, transitaron a ser reconocidos como personas libres y autónomas, con la plenitud de sus derechos, que

conforme a su edad y madurez deciden sobre los aspectos concernientes a su propia vida y asumen responsabilidades.

Según la Constitución (art. 44), son derechos fundamentales de los niños, entre otros, la vida, la integridad física, la salud, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor. Les reconoce a éstos el derecho a ser “*asistidos*” y “*protegidos*” para garantizar su “*desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos*”, como deber que pesa sobre el Estado, la familia y la sociedad. Establece, además, que serán protegidos contra toda forma de *abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual*, etcétera. Igualmente, se expresa que los niños también gozarán de los demás derechos contenidos en la Constitución, en las Leyes y en los *Tratados Internacionales ratificados por Colombia*. Por último, reza que los derechos de los niños y las niñas “*prevalecen sobre los derechos de los demás*”.

De otro lado, el artículo 45, *ejusdem*, refiere a los adolescentes para señalar que tienen derecho a la “*protección*” y a la “*formación integral*”. Adicionalmente, radica en cabeza del Estado y de la sociedad la garantía de la “*participación activa*” de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.

Tal reconocimiento constitucional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ha permitido a la Corte sostener que son *sujetos de especial protección constitucional*. Que dado el carácter superior y prevalente de sus derechos e intereses, tienen un *status* reforzado. Ha precisado que la condición de un menor no es motivo para reducir sus derechos, sino para *protegerlos* bajo el marco de las libertades y el principio de dignidad humana.

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la protección especial de los derechos del menor tiene fundamento principalmente en tres razones: i) la situación de fragilidad en que se

encuentran frente al mundo, atendiendo su desarrollo personal, impone al Estado cargas mayores en la defensa de sus derechos; ii) es una forma de promover una sociedad democrática cuyos asociados conozcan y compartan los principios de la libertad, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad; y iii) la pretensión de corrección del déficit de representación política que soportan los menores, al no poder participar directamente en el debate democrático.

También ha manifestado la Corte que el desarrollo de un menor es *armónico* cuando no se privilegia desproporcionadamente alguno de los diferentes aspectos de la formación, ni cuando se excluye o minimiza en exceso alguno de ellos, y es *integral* cuando se da en diversas dimensiones de la persona (intelectual, afectiva, social, cultural etc.).

Por otra parte, en la Sentencia 464 de 14, Magistrado ponente Alberto Rojas Ríos, se establecen los límites para la trata de personas y explotación de menores de edad.

**“ARTÍCULO 93. Ley 1453 de 2011, EXPLOTACIÓN DE MENORES DE EDAD.** El que utilice, instrumentalice, comercialice o mendigue con menores de edad directamente o a través de terceros incurrirá en prisión de 3 a 7 años de prisión y el menor será conducido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para aplicar las medidas de restablecimientos de derechos correspondientes.

La pena se aumentará a la mitad cuando el actor sea un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.

El representante del Ministerio del Interior, Andrés Gómez Roldán solicita declarar **exequible** el artículo 93 de la Ley 1453 de 2011 por cuanto la normatividad penal expone tipos punitivos diferentes, los cuales si bien impactan en cierta medida la conducta antijurídica de trata de personas, no se pueden estimar vulneratorios de la Constitución; ya que por el contrario, al tipificar conductas penales diferentes podrían construir para el ejecutor un marco integrador de

la normatividad en la materia. Dentro de esas disposiciones cita: reclutamiento ilícito (art. 162); tráfico de menores (art. 188); trata de personas (art. 188A); tráfico de niñas, niños y adolescentes (artículo 188C); uso de menores de edad (art. 188D); prostitución forzada o esclavitud sexual (art. 141); turismo sexual (art. 129); demanda de explotación sexual y comercial de persona menor de 18 años (art. 217A); pornografía con personas menores de 18 años (art. 218); inducción a la prostitución (art. 213); proxenetismo con menor de edad (art. 213A) y; constreñimiento a la prostitución (art. 214).

En este mismo sentido, el Defensor Delegado para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, Luis Manuel Castro Novia, solicita la exequibilidad del cargo por presunta vulneración del derecho a la igualdad y declarar la exequibilidad condicionada de la expresión “*o mendigue con menores de edad*”, contenida en el artículo 93 de la Ley 1453 de 2011, “*bajo el entendido que la conducta reprochable es el ejercicio de la mendicidad utilizando o valiéndose de menores de edad, mas no el ejercicio autónomo de la misma en compañía de estos*” –folio 93-.

Para la Defensoría del Pueblo el aparte acusado puede representar una forma de criminalizar la pobreza ya que incorpora elementos que constituyen un riesgo frente a la imputación de delitos a personas que por su condición de extrema pobreza y miseria, se ven obligados a realizar acciones de mendicidad con el fin de cubrir en algún grado sus necesidades, en algunos casos, en compañía o en presencia de niños, niñas o adolescentes, acción que no implica necesariamente un acto de explotación hacia el niño o la niña que acompaña al adulto a realizar esta actividad.

Asimismo, según el interviniente el tipo penal demandado “*no ofrece elementos para identificar si estos actos de mendicidad, en presencia de niños o niñas, son derivados de situaciones de extrema necesidad o urgencia manifiesta o efectivamente corresponden a actos de*



*explotación infantil, que, a juicio de la entidad, debe constituir el núcleo de este tipo penal” –folio 91-.*

### Capítulo III

#### 3.1.1.2 Tipo de investigación

Es una investigación o trabajo de grado de corte socio-jurídico, ya que parte de un conjunto de supuestos epistemológicos e instrumentos metodológicos que se deben utilizar para formular el Derecho, a partir de una concepción fáctica del mismo (Giraldo, J 2012) , pues trata una problemática que toca no solo a la familia como núcleo de la sociedad , sino, a la sociedad en general y le plantea al Estado la necesidad de intervenir a través de políticas públicas de prevención y sanción tendientes a erradicar este flagelo que ataca a la población infantil, no solo de Colombia, sino, del mundo entero,

Se utilizaron para desarrollar este trabajo las siguientes fuentes:

**Primarias:** Entrevista a funcionarios del ICBF, complementado con encuestas y trabajo de campo, que permite tener una visión general del problema.

**Secundarias:** Bibliografías, textos especializados revistas, tesis, artículos científicos, periódicos, jurisprudencias y datos estadísticos relacionados con la temática objeto de estudio.

#### 3.2 Nivel de investigación

Es analítico, que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que estudia para comprender su esencia, es decir, hace un análisis de las definiciones relacionadas con el tema (Hurtado, 2010) a través del cual se indagó acerca de la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en la proliferación de la prostitución infantil y la trata de menores.

Introito hacia una investigación que nos permita diagnosticar una situación con la finalidad de proponer una solución al problema.

**Procedimiento**

Basado en la prueba cualitativa, el esquema de los resultados tendrá un orden, comenzando por la mención y transcripción de los datos que fueron obtenidos a través de la entrevista a un funcionario competente y personas del común para conocer el problema que aqueja a la población y saber cuál es la percepción que tienen sobre el tema objeto de estudio.

La técnica de recolección que se utilizó fue la entrevista a funcionario del ICBF y a encuestas a personas de diferentes barrios de la ciudad. Es importante resaltar que esta técnica fue de gran ayuda para complementar el estudio sobre la prostitución infantil y la trata de personas en Barranquilla, ya que a través de estas se hace más evidente el problema y las consecuencias que trae, de igual manera se muestran los programas y políticas que viene desarrollando el Estado por medio del ICBF para minimizar este flagelo.

Para lograr lo anterior, se manejó un único formato con la finalidad de entender el impacto de este flagelo en la nuestra sociedad.

**Entrevistas**

A continuación, se transcribe la entrevista realizada a un profesional del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) y los resultados porcentuales de las encuestas 115 personas de los barrios Las Flores, El Bosque y Silencio de Barranquilla.

**Entrevista realizada al Dr. Ricardo Jiménez Barros, funcionario del ICBF, respecto a las conductas de trata de persona y prostitución infantil en Barranquilla.**

- 1. Desde su experiencia profesional. ¿Cuáles considera usted son las causas más recurrentes para la ocurrencia de esta conducta, en contra de los niños, niñas y adolescentes?**

R. // Las necesidades socio – económicas de la familia, la falta de orientación frente a la formación en derechos sexuales y reproductivos; la falta de resiliencia frente a los conflictos que se originan en la familia.

**2. Desde su perspectiva. ¿Cuáles considera usted son los efectos que se causan en los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de esta conducta delictiva?**

R. // Se menoscaba su autoestima, se deja de formar un ser humano integro.

**3. Me podría mencionar otras de las consecuencias que pueden presentar los niños, niñas y adolescentes que son víctimas del flagelo de la prostitución y la trata de personas**

R. // Al igual que las causas, son muchas las consecuencias de la prostitución infantil y la trata de personas que afectan en general.

Algunas de las consecuencias que detectamos con mayor frecuencia son:

- Embarazos a temprana edad
- Incremento de enfermedades de transmisión sexual
- Abortos a temprana edad
- Consecuencias psicológicas algunas veces irreparables, ya que muchos de ellos siguen con estos patrones de comportamiento

**4. ¿Qué políticas adelanta el ICBF para prevenir este tipo de conductas?**

R.// Desde el marco de la aplicación del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, la regional Atlántico contrata con la fundación Cede social programas de intervención de apoyo no solo a victimas de trata de personas o turismo sexual, sino de prevenir que

población vulnerable acceda a llegar a optar en el ejercicio de la prostitución como *modus vivendi*.

**5. Usted cree que los programas adelantados por el ICBF han dado los resultados esperados**

R. // Desde el ICBF se vienen adelantando unos programas de promoción y prevención orientados a la promoción integral de los niños, niñas y adolescentes, todo esto enmarcado en el código de Infancia y Adolescencia.

Este es un programa que hace parte de las estrategias para la protección integral, de las familias, la sociedad y el Estado; con esta estrategia se pretende sensibilizar a las familias para un crecimiento armónico e integral, este caso la educación se convierte en la principal estrategia para potencializar las habilidades de las personas y de esta manera los niños, niñas y adolescentes sean menos vulnerados por un mayor conocimiento de sí mismo y de su entorno, pues como señalan Samper y Esnares (2014, p. 46), CColombia promueve la educación para la participación democrática como mecanismo para superar sus dificultades.

**6. ¿cuál es la ruta de atención que adelanta el ICBF para atender a los niños, niñas y adolescentes que han sufrido este flagelo?**

R. // Los casos se decepcionan en los diferentes Centros Zonales de ICBF, desde ahí, se da traslado al equipo interdisciplinario de competencia para que cumpla con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 1098 de 2006, en donde el equipo interdisciplinario de defensoría de familia conceptúa si existe o no un derecho amenazado o vulnerado. Respecto a la trata de personas y prostitución, se podrían tener como vulnerados los derechos consagrados en el art. 18 y art. 20 *ibídem*, por lo que habría lugar a iniciar la acción administrativa citada y se ordena una medida de restablecimiento de derechos de las consagradas en el art 53de la referida normativa.

Se tienen 4 meses para que la autoridad administrativa restablezca los derechos y resuelva la situación jurídico-administrativa del menor de edad, ya sea declarando su derecho vulnerado, dejando en firme o modificando la medida ordenada en el auto de apertura o declarando la situación de adaptabilidad. (Art. 107 - Ley 1098 de 2006).

**Encuesta realizada a 60 ciudadanos del barrio las flores de Barranquilla, sobre la prostitución infantil y la trata de personas**

**¿Está usted de acuerdo con los programas y políticas establecidos por el Gobierno Nacional en materia de prostitución infantil y trata de blanca?**

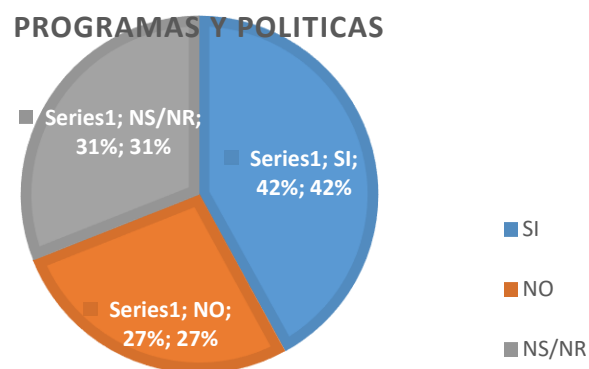


Figura 4. Resultado de la encuesta - si 56% no 25% no responde 19%

¿Usted cree que han sido efectivas las políticas y programas adoptadas por el Gobierno para erradicar la prostitución infantil y la trata de personas?

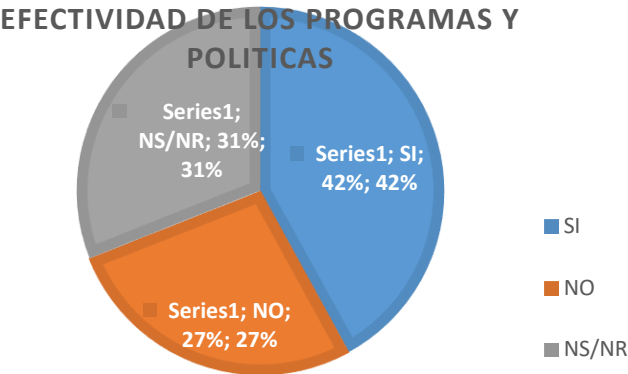


Figura 5. Resultado de la encuesta - si 40% no 35% no responde 25%

¿Usted cree que las medidas adoptadas por el Gobierno en contra de las personas que utilizan a los niños para la prostitución y a la trata de personas son contundentes?

SI 33%  
NO 50%  
NO RESPONDE 17%

MEDIDAS EN CONTRA DE LAS PERSONAS QUE INCITAN A LA PROSTITUCION Y LA T. PERSONAS

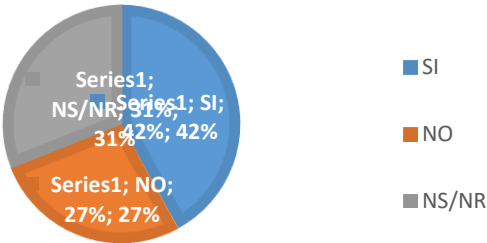


Figura 6. Resultado de la encuesta a cerca de la prostitución.

**6. ¿Usted cree que la violencia intrafamiliar es el factor que más incide en el incremento de la prostitución infantil y la trata de personas?**

SI 65%

NO 10%

NO RESPONDE 25%

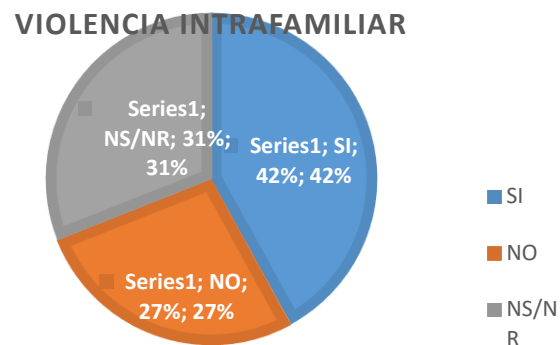


Figura 7. Encuesta de la violencia intrafamiliar.

**Encuesta realizada a 45 ciudadanos del barrio la paz de Barranquilla, sobre la prostitución infantil y la trata de personas**

**1. ¿Está usted de acuerdo con los programas y políticas establecidos por el Gobierno Nacional en materia de prostitución infantil y trata de blanca?**

SI 62%

NO 20%

NO RESPONDE 18%



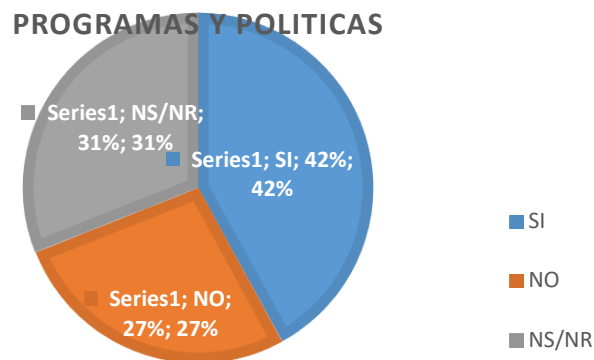


Figura 8. Encuesta de programa y políticas.

2. ¿Usted cree que han sido efectivas las políticas y programas adoptadas por el Gobierno para erradicar la prostitución infantil y la trata de personas?

SI 35%

NO 28%

NO RESPONDE 37%



Figura 9. Encuesta de efectividad de programa

3. ¿Usted cree que las medidas adoptadas por el Gobierno en contra de las personas que utilizan a los niños para la prostitución y a la trata de personas son contundentes?

SI 20%

NO 66%

NO RESPONDE 14%

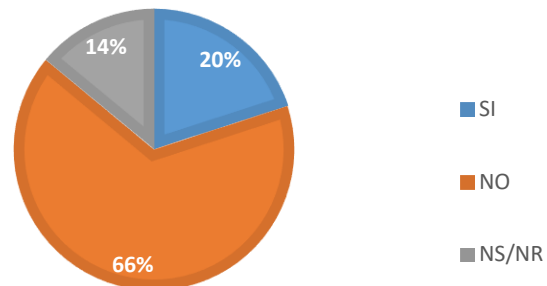
**MEDIDAS EN CONTRA DE LAS PERSONAS QUE  
INCITAN A LA PROSTITUCION Y LA T. PERSONAS**

Figura 10. Encuesta a cerca de estar en contra a las personas que incitan la prostitución

**4. ¿Usted cree que la violencia intrafamiliar es el factor que más incide en el incremento  
de la prostitución infantil y la trata de personas?**

SI 75%

NO 10%

NO RESPONDE 15%

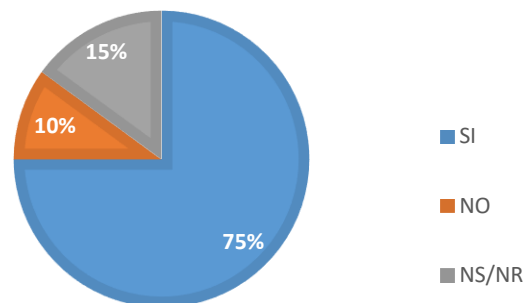
**VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**

Figura 11. Violencia intrafamiliar en la prostitución infantil

**Encuesta realizada a 65 ciudadanos del barrio el bosque de Barranquilla, sobre la  
prostitución infantil y la trata de personas**

**1. ¿Está usted de acuerdo con los programas y políticas establecidos por el Gobierno Nacional en materia de prostitución infantil y trata de blanca?**

SI 42%

NO 35%

NO RESPONDE 23%

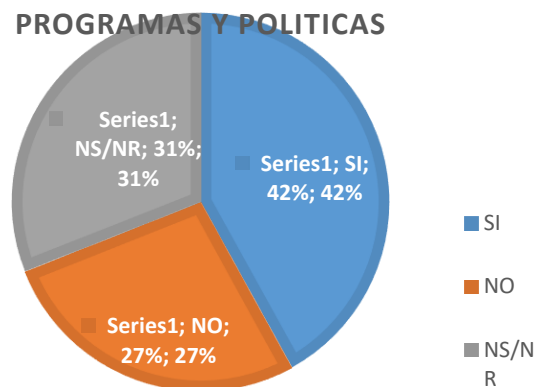


Figura 12. Programas y políticas para erradicar la prostitucion

**2. ¿Usted cree que han sido efectivas las políticas y programas adoptadas por el Gobierno para erradicar la prostitución infantil y la trata de personas?**

SI 60%

NO 25%

NO RESPONDE 15%

**EFFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS Y POLITICAS**

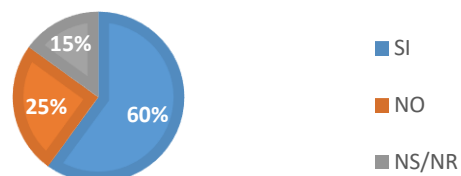


Figura 13. Efectividad de los programas políticos

- 3. ¿Usted cree que las medidas adoptadas por el Gobierno en contra de las personas que utilizan a los niños para la prostitución y a la trata de personas son contundentes?**

SI 23%

NO 64%

NO RESPONDE 13%

- 4. ¿Usted cree que la violencia intrafamiliar es el factor que más incide en el incremento de la prostitución infantil y la trata de personas?**

SI 78%

NO 12%

NO RESPONDE 10%

**Encuesta realizada a 45 ciudadanos del barrio Cevillar de Barranquilla, sobre la  
prostitución infantil y la trata de personas**

- 1. ¿Está usted de acuerdo con los programas y políticas establecidos por el Gobierno Nacional en materia de prostitución infantil y trata de blanca?**

SI 58%

NO 17%

NO RESPONDE 15%

- 2. ¿Usted cree que han sido efectivas las políticas y programas adoptadas por el Gobierno para erradicar la prostitución infantil y la trata de personas?**

SI 74%

NO 20%

NO RESPONDE 6%

- 3. ¿Usted cree que las medidas adoptadas por el Gobierno en contra de las personas que utilizan a los niños para la prostitución y a la trata de personas son contundentes?**

SI 32%

NO 25%

NO RESPONDE 43%

- 4. ¿Usted cree que la violencia intrafamiliar es el factor que más incide en el incremento de la prostitución infantil y la trata de personas?**

SI 58%

NO 24%

NO RESPONDE 18%

**Encuesta realizada a 30 ciudadanos del barrio el Silencio de Barranquilla, sobre la  
prostitución infantil y la trata de personas**

- 1. ¿Está usted de acuerdo con los programas y políticas establecidos por el Gobierno Nacional en materia de prostitución infantil y trata de blanca?**

SI 58%

NO 30%

NO RESPONDE 12%

- 2. ¿Usted cree que han sido efectivas las políticas y programas adoptadas por el Gobierno para erradicar la prostitución infantil y la trata de personas?**

SI 44%

NO 23%

NO RESPONDE 33%

- 3. ¿Usted cree que las medidas adoptadas por el Gobierno en contra de las personas que utilizan a los niños para la prostitución y a la trata de personas son contundentes?**

SI 50%

NO 30%

NO RESPONDE 20%

- 4. ¿Usted cree que la violencia intrafamiliar es el factor que más incide en el incremento de la prostitución infantil y la trata de personas?**

SI 42%

NO 27%

NO RESPONDE 31%

### **3.3 Totales**

- 1. ¿Está usted de acuerdo con los programas y políticas establecidos por el Gobierno Nacional en materia de prostitución infantil y trata de blanca?**

SI 55.2%

NO 25.4%

NO RESPONDE 17%

- 2. ¿Usted cree que han sido efectivas las políticas y programas adoptadas por el Gobierno para erradicar la prostitución infantil y la trata de personas?**

SI 50.6%

NO 26.2%

NO RESPONDE 23.2%

- 3. ¿Usted cree que las medidas adoptadas por el Gobierno en contra de las personas que utilizan a los niños para la prostitución y a la trata de personas son contundentes?**

SI 31.6%

NO 47%

NO RESPONDE 21.4%

**4. ¿Usted cree que la violencia intrafamiliar es el factor que más incide en el incremento de la prostitución infantil y la trata de personas?**

SI 63.6%

NO 16.6%

NO RESPONDE 19.8%

**4. Análisis de resultados e interpretación de datos**

De la información recolectada a través del trabajo de campo realizado y de la literatura especializada consultada, se puede deducir claramente que la prostitución infantil y trata de menores es un fenómeno social enraizado en la cultura de una comunidad los relacionados con el medio ambiental, el familiar y el individual y siempre en correlación con la familia y del estado. En cuanto a las causas y sus efectos se tienen identificadas las siguientes; las necesidades socio – económicas de la familia, la falta de orientación frente a la formación en derechos sexuales y reproductivos, la falta de resiliencia frente a los conflictos que se originan en la familia y la violencia intrafamiliar como factores que más incide en el incremento de la prostitución infantil y la trata de personas.

Entre los efectos de mayor relevancia se encontraron que se menoscaba su autoestima, se deja de formar un ser humano integro, se incrementan los embarazos a temprana edad, incremento de enfermedades de transmisión sexual, al igual que los abortos a temprana edad, trayendo consecuencias psicológicas alguna vez irreparable, ya que muchos de ellos siguen con estos patrones de comportamiento en su vida adulta.

Desde el marco de la aplicación del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, la regional Atlántico contrata programas de intervención de apoyo

no solo a víctimas de trata de personas o turismo sexual, sino para prevenir que población vulnerable acceda a llegar a optar en el ejercicio de la prostitución como modus vivenda.

El programas de promoción y prevención orientados a la promoción integral de los niños, niñas y adolescentes, enmarcado en el código de Infancia y Adolescencia establece las estrategias para la protección integral, de las familias, con esta estrategia se pretende sensibilizar a las familias para un crecimiento armónico e integral, este caso la educación se convierte en la principal estrategia para potencializar las habilidades de las personas y de esta manera los niños, niñas y adolescentes sean menos vulnerados por un mayor conocimiento de sí mismo y de su entorno, pues como señalan Samper y Esnares (2014, p. 46) Colombia promueve la educación para la participación democrática como mecanismo para superar sus dificultades.

Los programas y políticas establecidos por el Gobierno Nacional para erradicar la prostitución infantil y trata de menores han sido efectivos en un alto porcentaje, pero requieren mayor impacto social.

Lo anteriormente expuesto debe tomarse en cuenta y encender las alarmas en cuanto a qué estamos haciendo como familia, y como Estado para salvaguardar los derechos de estos niños y niñas que están sufriendo las consecuencias de la prostitución infantil y la trata de menores, que conlleven a forjar políticas públicas de fondo para bajar los altos niveles de estos delitos y al mismo tiempo se procure sanciones pedagógicas con las familias que incurren por omisión de sus funciones en la prostitución infantil y la trata de menores



## **5. Conclusiones**

Después de hacer un estudio minucioso sobre el tema, podemos manifestar que a partir de esta investigación se pudo concluir que el problema de trata de personas y prostitución infantil, trae consecuencias nefastas para los menores y adolescentes que la padecen, tales como embarazos a temprana edad, incremento de enfermedades infecto-contagiosas o de transmisión sexual, abortos a temprana edad, tortura física y psicológica, repudio social y familiar, además de las consecuencias psicológicas irreparables.

Frente a esta situación, son esencialmente responsables el Estado, quien debe liderar programas de prevención y brindar a los menores y su familia las posibilidades de tener una vida digna, donde sus necesidades básicas se encuentren satisfechas; la familia, por la omisión vigilante de los adolescentes, niños y niñas, quienes al no estar bajo el control y supervisión de los padres o de un adulto responsable, quedan a la deriva y de fácil acceso de personas inescrupulosas que los engañan y los llevan a la prostitución, sin que los padres siquiera se percaten de ello y la sociedad bajo el principio de corresponsabilidad, se muestra indiferente ante la problemática, pudiendo ejercer un rol vigilante y garante de los derechos constitucionales de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

No obstante, lo anterior, se pudo evidenciar que el Gobierno a nivel nacional y regional a través de los programas y Proyectos liderados por El Instituto de Bienestar Familiar – ICBF, viene trabajando con las familias y las víctimas de este flagelo para mitigar los efectos producidos por el mismo. Además, se

están impartiendo campañas de sensibilización para que los niños, niñas y adolescentes no incursionen en estas prácticas y sean reclutados por personas inescrupulosas que los utilizan como objetos sexuales, que se ofrecen al mejor postor.

## **6. Recomendaciones**

Es necesario emprender una cruzada académica desde la infancia hasta la adultez. La razón inevitable a esta recomendación es que nadie está excepto de padecer este flagelo, en virtud a que en cualquier lugar y a cualquier hora asechan los oportunistas para seducir a los incautos.

Es menester también, que los niños, niñas, y adolescentes, estén prevenidos en el tema de las redes sociales, en las casas de modelajes, en la formación de actrices y actores, que muchas veces se prestan como trampolín para la fama y el dinero fácil y terminan en manos de bandas dedicadas única y exclusivamente al negocio de trata de personas y prostitución infantil, que es un negocio muy lucrativo.

Adelantar campañas de sensibilización por los diversos medios de comunicación respecto al tema y los riesgos que corre la población infantil y adolescentes de caer en estas actividades delictivas.

Desde las escuelas realizar jornadas de empoderamiento a través de actividades lúdicas para que los chicos y chicas aprendan a amar y respetar su cuerpo y su dignidad como seres humanos valiosos para la familia y la sociedad.

Promover en las Escuelas de Padres de las instituciones educativas la unidad y armonía familiar como estrategia para evitar la deserción escolar y la desintegración de la familia como núcleo fundamental de la sociedad.

## 7. Referencias

- Álvarez, A. Sandoval, O. Saker, J. Moreno, G. 2017. *Competencias ciudadanas para la formación integral en educación superior. Primera edición*, Editorial Educosta. Barranquilla
- Álvarez C., Miguel; Suárez, Roberto (1998): *Niños y jóvenes de sexo masculino prostituidos: una visión desde la perspectiva de sus derechos: perfil y factores de riesgo*. Procuraduría General de la Nación. Universidad de Los Andes. UNICEF. Bogotá
- Aponte, M.; García, Carlos Iván (2002). *Explotación Sexual Infantil en Bogotá. Departamento Administrativo de Bienestar Social, Alcaldía Mayor de Bogotá DC. Universidad Externado de Colombia. Bogotá.*
- Cárdenas, S.; Rivera, Nelson (2000): *Renacer: Una propuesta para volver a nacer. Fundación Renacer y UNICEF- Colombia. Bogotá.*
- Constitución Política de Colombia.
- Dimensiones de la trata de personas en Colombia, Organización Internacional para las Migraciones, OIM, Departamento Administrativo de Seguridad – Policía Internacional (DAS – INTERPOL) Bogotá, Colombia, febrero de 2006.
- ECPAT International (2016). Power, Impunity and Anonymity. Understanding Forces driving the Demand for Sexual Exploitation of Children. ECPAT International.
- OEA – OIM. Trata de personas aspectos básicos. 2006. Pág. 9
- Estudio nacional exploratorio descriptivo sobre el fenómeno de trata de personas en Colombia. Universidad Nacional de Colombia 2009.

Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes en Colombia: “Estudio de Línea de base en Cundinamarca, Quindío y Valle del Cauca”. Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador. 2006

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA – UNICEF

Giraldo, J. *Metodología y técnica de Investigación Socio jurídica: Investigación bibliográfica. Programa de Derecho*. Universidad de Ibagué. 2012.

Fundación Unimedicos. Basta prostitución infantil en Colombia.

Heinrich, K. H. “Ten Years After the Palermo Protocol: Where are Protections for Human Trafficking Victims?” Human Rights Brief, 18 (1): 2-5. 2010.

Henao M. *Lucha contra la trata de personas: Desafío para Colombia en el siglo XXI*

Hernández, D. y Rudolph, A. “*Determinants of Human Trafficking in Europe - A gravity model approach*”, European Public Choice Society 2011.

Hernández, Judith. (2007). Toma de decisiones públicas desde las perspectivas del proceso tecnocrático y la participación ciudadana: El caso venezolano. *Revista venezolana de gerencia*, año 12 No. 40, pp. 553-571

Hurtado, J. Guía para la comprensión holística de la ciencia. 2010.

LEY 26842. Trata de persona código penal.

Ley 985 de 2005. Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma.

Ley 1098/2006. Código de Infancia y adolescencia

Manual Sobre La Investigación Del Delito De Trata De Personas Guía De Autoaprendizaje.

Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito 2010.

“Manual de Derechos Humanos y Trata de Personas.” GAATAW/OIM, Bogotá, Colombia, 2004.

Mariblanca Staff Wilson. Recorrido histórico sobre la trata de personas Panamá.

Organización Internacional Para Las Migraciones, OIM. Guía de asistencia a víctimas de la trata de personas en Colombia. Bogotá: Nuevas Ediciones Ltda., 2006 pp. 2

Pomares Cintas, E. El delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología. RECP 13-15. 2011.

Protocolo de Palermo, Convención de la Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Palermo – Italia, 2000

Ramírez M., Juan. *Prostitución infantil Fenómeno de Una Sociedad Indiferente*. Universidad Anáhuac. Director de Proyecto del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2012, núm. 14-13, p. 13:1-13:28 – ISSN 1695-0194.

Segura Escobar Nora. La prostitución infantil y la educación en Colombia. Unesco Bogotá 1992.

Stefanizzi, S. “Measuring the Non-measurable: Towards the Development of Indicators of Measuring Human Trafficking”, en E. Savona, y S. Stefanizzi, (eds.), *Measuring Human Trafficking. Complexities and Pitfalls*, Estados Unidos: ISPAC. 2007.

Surtees, R. “Traffickers, trafficking in Southern, and Eastern Europe”, *European Journal of Criminology*, 5 (1): 39-68. 2008.

Trata de personas. Aspectos básicos. Organización Internacional para las Migraciones. Primera edición 2006.

Trata de persona. Especialmente mujeres y niños. Una forma de esclavitud moderna. UNICEF.

Trata de persona. Una forma de esclavitud moderna. UNICEF. 2012.

Zúñiga, L. *Criminalidad organizada y sistema de derecho penal. Contribución a la determinación del injusto penal de organización criminal*. Granada: Editorial Comares. 2009.